

**Tesis****Registro digital:** 175306**Instancia:** Segunda Sala**Tesis:** 2a./J. 50/2006**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Laboral**Tipo:** Jurisprudencia

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SUS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A RECIBIR, POR SU ANTIGÜEDAD, LOS QUINQUENIOS, PENSIONES Y DEMÁS PRESTACIONES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS BUROCRÁTICAS, PERO NO LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD QUE INSTITUYE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su apartado A, el régimen jurídico a que están sujetas las relaciones laborales de los patrones con los obreros, jornaleros, domésticos, artesanos y, en general, todos los obligados por un contrato de trabajo; en concordancia con dicho apartado, la Ley Federal del Trabajo prevé, entre otros beneficios para los trabajadores, con cargo al patrón, la prima de antigüedad (artículo 162); por su parte, el apartado B del indicado precepto constitucional instituye los principios fundamentales que rigen las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus servidores por la otra; este apartado y las leyes que lo reglamentan, aunque no establecen la prima de antigüedad, sí instauran otros beneficios para los servidores públicos con motivo de su antigüedad, con cargo principalmente al presupuesto de egresos y, de manera más reducida, a dichos trabajadores. Ahora bien, los dos sectores laborales mencionados están claramente catalogados en cuanto a su régimen, lo que no sucede con los trabajadores al servicio de los organismos descentralizados de orden federal, respecto de los cuales no existe un sistema ordenado, pues en unos casos se gobiernan por el referido apartado A y otros por el B; tal incertidumbre, sin embargo, no debe llevar a aceptar que un trabajador de un organismo descentralizado, como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tiene derecho a los beneficios por antigüedad que se establecen en ambos apartados, porque tal extremo no lo establece ninguna norma constitucional ni legal, y tampoco puede, jurídicamente, apoyarse en la jurisprudencia P./J. 1/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, página 52, con el rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.", porque no produce el efecto de modificar las relaciones jurídicas entre el citado Instituto y sus trabajadores durante el tiempo que duró la relación laboral, y si bien es cierto que obliga a los tribunales, también lo es que la aplicación que éstos hagan de ella debe apegarse a la lógica. Por tanto, si un trabajador del referido Instituto que laboró bajo el régimen del apartado B del artículo 123 constitucional, ya recibió los beneficios por antigüedad correspondiente, como son los aumentos quinquenales de su sueldo y la pensión relativa, no tiene derecho, además, al pago de la prima de antigüedad establecida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.

Contradicción de tesis 12/2006-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno y Cuarto, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 3 de marzo de 2006. Cinco votos.

Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

Tesis de jurisprudencia 50/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de marzo de dos mil seis.

### Tesis

**Registro digital:** 175403

**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito

**Novena Época**

**Materia(s):** Laboral

**Tesis:** I.3o.T.131 L

**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

**Tipo:** Aislada

TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y SU LEY REGLAMENTARIA.

El artículo 122, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás órganos que establezca el Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial del fuero común en el Distrito Federal; consecuentemente, si el estatuto a que remite dicho precepto constitucional, en su numeral 128 establece que el Tribunal Electoral del Distrito Federal es un órgano autónomo y de máxima autoridad jurisdiccional para la solución de controversias en esa materia, es incuestionable que dicho tribunal ejerce una función judicial en términos del referido precepto 122. Por otra parte, tomando en consideración que el ordinal 7o. del estatuto dispone que el Gobierno del Distrito Federal está a cargo de los Poderes Federales, y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y, además, que el artículo 13 del invocado estatuto indica que las relaciones de trabajo entre el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores se regirán por el apartado B del artículo 123 de la Carta Magna, al ser parte el Tribunal Electoral del Gobierno del Distrito Federal, es inconcuso que las relaciones laborales entre dicho tribunal y sus trabajadores se rigen por el apartado B del citado artículo 123 y, en consecuencia, en su ley reglamentaria, que lo es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 20483/2005. Héctor Jorge Sánchez Sotomayor. 28 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Arturo Mercado López. Secretario: Pedro Cruz Ramírez.

### Tesis

**Registro digital:** 175404

**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito

**Novena Época**

**Materia(s):** Laboral

**Tesis:** I.3o.T.130 L

**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

**Tipo:** Aislada

TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. EL PROCEDIMIENTO QUE SEÑALA SU REGLAMENTO INTERIOR PARA RESOLVER LAS DIFERENCIAS O CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN ENTRE ÉSTE Y SUS TRABAJADORES NO PUEDE CONTROVERTIR NI TRASTOCAR LOS DERECHOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES PREVISTOS EN EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y SU LEY REGLAMENTARIA.

Conforme al artículo 273, en concordancia con el inciso c) de la fracción II del ordinal 227, ambos del Código Electoral del Distrito Federal, el Tribunal Electoral del Distrito Federal tiene facultades para resolver las diferencias o conflictos que se susciten entre éste y sus trabajadores, sujetándose al procedimiento que el propio ordenamiento señala y a lo que disponga el reglamento interior de dicho órgano jurisdiccional; sin embargo, dichos conflictos deben resolverse de acuerdo a lo que establezca el apartado B del artículo 123 constitucional y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en los que se establecen derechos sustantivos y procesales que deben observarse en este tipo de conflictos; de tal manera que el procedimiento establecido en dicho reglamento no puede controvertir ni trastocar los mencionados derechos sustantivos y procesales establecidos en ley federal citada, sino que únicamente debe regular los diversos pasos a seguir para que el tribunal pueda sustanciarlos.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 20483/2005. Héctor Jorge Sánchez Sotomayor. 28 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Arturo Mercado López. Secretario: Pedro Cruz Ramírez.

**Tesis****Registro digital:** 175572**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito    **Novena Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** I.3o.T.124 L**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. AUN CUANDO ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO NO ESTÁ OBLIGADO A INSCRIBIR A SUS TRABAJADORES ANTE DIVERSA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, POR ESTAR DOTADO DE LOS MEDIOS ECONÓMICOS E INFRAESTRUCTURA SUFICIENTES PARA BRINDAR LAS PRESTACIONES DE ESA NATURALEZA.

Conforme a las jurisprudencias P./J. 1/96 y 2a./J. 22/96, emitidas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, página 52 y Tomo III, mayo de 1996, página 153, de rubros: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL." y "COMPETENCIA LABORAL. DEBE DECLARARSE A FAVOR DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUANDO SE DEMANDA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.", respectivamente, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es un organismo público descentralizado, por lo que las relaciones con sus trabajadores deben regularse por el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no por el apartado B. Lo anterior podría conducir a establecer que la seguridad social de los trabajadores de dicho instituto tendría que otorgarse a través de los organismos y dependencias que regularmente brindan servicios a los trabajadores que se rigen por dicho apartado, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, de los artículos 1o., 2o. y 3o. de la ley que lo rige, que establecen, respectivamente, que sus disposiciones son de orden público y de interés social; que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual o colectivo; y que la realización de la seguridad social está a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos descentralizados, conforme a lo dispuesto por esa ley y demás ordenamientos legales sobre la materia; se desprende que existen otras instituciones que tienen como finalidad brindar la seguridad social, como lo es el propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el que acorde con los artículos 2o. a 5o. de la ley que lo regula, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por finalidad brindar la seguridad social, que comprende, entre otros, los seguros, prestaciones y servicios que enumera el ordinal 3o. de dicha ley, así como la del fondo de vivienda, y retener las aportaciones del sistema de ahorro para el retiro, entre otros sujetos de derecho, a los propios trabajadores de ese instituto; consecuentemente, aun cuando las relaciones de trabajo de los organismos públicos descentralizados se rigen por el apartado A del artículo 123 constitucional, como un caso de excepción, dicho instituto no está obligado a inscribir a sus trabajadores ante diverso organismo de seguridad social, pues atendiendo a la finalidad para la que fue creado y al estar dotado con los medios económicos e infraestructura necesarios, él puede proporcionar las

prestaciones de seguridad social, así como aplicar los descuentos de las cuotas correspondientes.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 18123/2005. Mireya López Hernández. 21 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Arturo Mercado López. Secretario: Pedro Cruz Ramírez.

**Tesis****Registro digital:** 175848**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito    **Novena Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** XX.2o.34 L**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

PRIMA QUINQUENAL. LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE CHIAPAS TIENEN DERECHO A ESA PRERROGATIVA EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL LOCAL.

De una nueva reflexión respecto del pago de la prima quinquenal a los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios de Chiapas, y acorde con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a./J. 99/2005, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 381, de rubro: "PRIMA VACACIONAL. LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE CHIAPAS TIENEN DERECHO A ESA PRERROGATIVA EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL LOCAL.", este órgano de control de legalidad se aparta del criterio contenido en la tesis XX.2o.27 L, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, agosto de 2005, página 1968, de rubro: "PRIMA QUINQUENAL. NO SE ACTUALIZA LA SUPLETORIEDAD DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS, AL NO PREVER ESTA ÚLTIMA LA PROCEDENCIA DE ESE DERECHO.", en la que sustancialmente se estableció que en tratándose del pago de la prima quinquenal a los trabajadores mencionados, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no era supletoria de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, por estimarse que no se contemplaba ese derecho. Cambio que también obedece, por una parte, a que del proceso legislativo de reforma al artículo 116, fracción VI, de la Carta Magna, en el que se otorgó a las Legislaturas Estatales la facultad para crear leyes que regularan las relaciones laborales entre el Estado y sus Municipios con sus empleados, vinculándolas para que lo hicieran con base en los derechos mínimos tutelados en el apartado B del numeral 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto dentro del cual queda comprendida la protección al salario del trabajador, sea obrero, jornalero o servidor público de la Federación, de los Estados y de los Municipios; y, por otra, que de la exposición de motivos de la adición del segundo párrafo del ordinal 34 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, supletoria de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, se advierte que la prima quinquenal constituye una prerrogativa necesaria para lograr la eficacia al disfrute del derecho mínimo de protección al salario que se consagra en el apartado B del invocado precepto constitucional, al haberse establecido como una prestación adicional al salario del trabajador, con la cual el Estado reconoce el esfuerzo y colaboración de los empleados públicos en la consecución de sus propósitos; además, del contenido de las fracciones IV y VI del apartado B del referido numeral 123, se desprende que el Constituyente previó medidas de protección al salario, entre otras, que sería fijado en los presupuestos respectivos, sin que su cuantía pudiera ser disminuida durante su vigencia, y que no podrían ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en el Distrito



Federal y en las entidades de la República; y que sólo podrían hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos, en los casos previstos en las leyes; de donde se advierte que una de las medidas de protección al salario consiste en que esa retribución no podrá ser restringida, pero sí es extensiva a las condiciones laborales de cualquier trabajador, sea de base o de confianza, donde queda incluido el pago de la prima quinquenal, precisamente por constituir un incremento al salario que se otorga al trabajador como estímulo por su desempeño. En esa tesitura, si al regular las relaciones laborales entre los poderes de la entidad y los Municipios con sus trabajadores, la Legislatura del Estado de Chiapas omitió indicar expresamente que el pago de la prima quinquenal formaba parte del salario; ello no significa que su intención hubiera sido privarlos de esa prerrogativa, pues conforme al precitado criterio del más Alto Tribunal del país, en la aplicación supletoria de la ley no resulta indispensable que el ordenamiento que permite dicha supletoriedad regule la institución a suplir, con tal de que ésta sea necesaria para lograr la eficacia de las disposiciones contenidas en la ley suplida, como sucede en el caso del pago de la prima quinquenal, que se instituyó como una prerrogativa indispensable para lograr la eficacia al disfrute del derecho mínimo de protección al salario, que constitucional y legalmente corresponde a los trabajadores a que se refiere la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, la cual en su capítulo tercero, vinculado con los sueldos, no prevé de manera específica dicha figura jurídica. Por otra parte, tomando en cuenta que el artículo noveno transitorio del ordenamiento legal citado, señala: "En lo no previsto y que no se oponga a esta ley es supletoria la Ley Federal de los Trabajadores del Estado.", y el dispositivo 34 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado sí regula la mencionada prerrogativa, es válido establecer que con la integración normativa de la ley que se aplica supletoriamente al ordenamiento estatal de la materia, no se crea una institución extraña que el legislador no hubiera tenido la intención de establecer, puesto que la protección al salario es también un derecho mínimo garantizado para los trabajadores al servicio del Estado, que dispuso el legislador ordinario federal y el pago de la prima quinquenal constituye una de esas medidas; en consecuencia, es válido concluir que no fue voluntad del legislador estatal la omisión de incluir esa figura jurídica en la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, sino que constituye únicamente un vacío legislativo que permite acudir a la supletoriedad de leyes, concretamente a la aplicación del artículo 34 citado, que sí prevé esa prerrogativa laboral, con el objeto de adecuar el orden normativo de la ley burocrática local a los postulados que en materia de estas relaciones se encuentran previstos en el apartado B del artículo 123 constitucional.

## SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

Amparo directo 724/2004. Adriana Beatriz López Razo y otros. 10 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez.

### Nota:

Esta tesis se aparta del criterio sostenido por el propio tribunal en la diversa XX.2o.27 L, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, agosto de 2005, página 1968.

Por ejecutoria del 3 de junio de 2015, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 108/2015 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.



**Tesis****Registro digital:** 176428**Instancia:** Pleno**Tesis:** P. LIV/2005**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Laboral**Tipo:** Aislada

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. TIENEN DERECHO AL PAGO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO, ACORDE CON LA FRACCIÓN XIV DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.

Conforme al citado precepto constitucional los trabajadores de confianza disfrutaban de las medidas de protección al salario, las cuales garantizan a todos los trabajadores al servicio del Estado el derecho a recibir las diversas remuneraciones previstas en la ley laboral una vez que se ubiquen en los supuestos de hecho que generan el derecho a su pago; de ahí que si bien los trabajadores de confianza no gozan de estabilidad en el empleo, ello no obsta para reconocer que constitucionalmente se les otorga el derecho a percibir las mismas remuneraciones legalmente generadas por la prestación de servicios al Estado. En estas condiciones, si las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo constituyen prerrogativas establecidas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con independencia de que ésta sea inaplicable directamente a los trabajadores de confianza, se concluye que por disposición constitucional a ellos les asiste el derecho a disfrutarlas cuando se ubican en los supuestos que justifican su pago.

Conflicto de trabajo 2/2004-C. Suscitado entre Elvia Frías Fuentes y las Direcciones Generales de Desarrollo Humano, ahora de Personal y Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 8 de agosto de 2005. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, José de Jesús Gudiño Pelayo y Margarita Beatriz Luna Ramos.

El Tribunal Pleno, el quince de noviembre en curso, aprobó, con el número LIV/2005, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a quince de noviembre de dos mil cinco.

**Tesis****Registro digital:** 176632**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Administrativa**Tesis:** I.7o.A.425 A**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

SERVICIO DE ESTANCIAS PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL DEL ISSSTE. EL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO RELATIVO QUE ESTABLECE EL PAGO DE CUOTAS PARA LA CONTINUACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A PARTIR DE QUE EL MENOR DERECHOHABIENTE CUMPLA SEIS AÑOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 3o. CONSTITUCIONAL.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de acuerdo con el artículo 4o. de la ley que lo rige, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios; encargado de la administración de los seguros, prestaciones, servicios sociales y de salud que el propio ordenamiento establece, los cuales se encuentran tutelados por el artículo 123, apartado B, constitucional, incluido el servicio de guarderías infantiles; por ello, si bien es cierto que de los artículos 3o., fracción XI, 140 y 141, fracción VI, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 12, fracción III, del Reglamento del Servicio de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se establece como una de las secciones que comprende tal servicio, la educación preescolar, también lo es que ello deriva de una prestación social, generada por virtud de la apuntada tutela que de tal beneficio reconoce el artículo 123 constitucional, en su apartado B, fracción XI, inciso c); el brindado por el Estado a través de su organismo descentralizado señalado, no en su carácter de ente de derecho público, sino como patrón, esto es, como ente de derecho privado; por ello, si se parte de la base de que el artículo 3o. constitucional garantiza la gratuidad de la educación impartida por el Estado como ente de derecho público, entonces es claro que, no encuadra en la hipótesis normativa en cuestión, pues en el caso no obra con ese carácter; de tal guisa que, constitucionalmente, nada impide que el propio instituto pueda cobrar por la prestación del servicio, salvo que exista algún impedimento para ello, derivado de la ley ordinaria; por lo cual, es claro que el artículo 13 del reglamento citado, en tanto que establece cuotas para la continuación de la prestación del servicio de educación preescolar, una vez que el menor cumpla seis años, antes de que concluya el periodo escolar de que se trate, no transgrede, por ese hecho, el artículo 3o. constitucional.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 379/2005. Eva Hernández Juárez, por su propio derecho y en representación de la menor Cynthia Berenice Morales Hernández. 11 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Luis Huerta Martínez.

**Tesis****Registro digital:** 177212**Instancia:** Segunda Sala**Tesis:** 2a./J. 99/2005**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Laboral**Tipo:** Jurisprudencia

PRIMA VACACIONAL. LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE CHIAPAS TIENEN DERECHO A ESA PRERROGATIVA EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL LOCAL.

La prima vacacional es una prestación que posibilita a los trabajadores afrontar los gastos extraordinarios inherentes al disfrute de las vacaciones a las que constitucionalmente tienen derecho. En ese sentido, si la Legislatura del Estado de Chiapas, al regular las relaciones laborales entre los poderes de la entidad y sus trabajadores, consignó el derecho de éstos a las vacaciones sin establecer, expresamente, la prima adicional, ello no significa que su intención hubiera sido privarlos de ese derecho, pues conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la aplicación supletoria de la ley no resulta indispensable que el ordenamiento que permite dicha supletoriedad regule la institución a suplir, con tal de que ésta sea necesaria para lograr la eficacia de las disposiciones contenidas en la ley suplida, como sucede en el caso de la prima vacacional que se instituyó, no como una prestación accesorio, sino consustancial a la de vacaciones, lo cual implica que ante la omisión de mérito por parte del legislador, se está en presencia de un vacío legislativo que, jurídicamente, hace válida la aplicación supletoria del último párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en términos del artículo noveno transitorio de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas que permite dicha supletoriedad, con el objeto de adecuar el orden normativo de esta ley a los postulados que en materia de relaciones burocráticas están previstos en el apartado B del artículo 123 constitucional y en su referida ley reglamentaria, a los que debe sujetarse de conformidad con el artículo 116, fracción VI, de la propia Carta Magna.

Contradicción de tesis 60/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Vigésimo Circuito. 12 de agosto de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Aída García Franco.

Tesis de jurisprudencia 99/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de agosto de dos mil cinco.

**Tesis****Registro digital:** 178278**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito**Novena Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** I.6o.T.256 L**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA TENER DERECHO AL PAGO DE PRESTACIONES EXTRALEGALES CONSIGNADAS EN LA LEY BUROCRÁTICA (QUINQUENIO), DEBEN ACREDITAR QUE REÚNEN LOS PRESUPUESTOS EXIGIDOS POR ESTA NORMATIVIDAD Y QUE EL TITULAR DEL INSTITUTO SE LOS RECONOCIÓ EXPRESAMENTE.

Los artículos 46, fracción IV y 47, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, prevén la obligación del titular del instituto de cubrir a los trabajadores salarios, compensaciones, gratificaciones, primas, indemnizaciones, prestaciones, estímulos, premios, recompensas y, en general, todo emolumento al que tengan derecho en los términos y plazos establecidos en las condiciones generales de trabajo, en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley del ISSSTE; así como el derecho de los trabajadores de recibir los beneficios y disfrutar de las prestaciones señaladas en los ordenamientos citados. Por otra parte, en la jurisprudencia P./J. 1/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cincuenta y dos, Tomo III, febrero de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.", se sostiene que la relación laboral entre ese tipo de organismos descentralizados con sus trabajadores no se rige por el apartado B del artículo 123 constitucional, por lo que debe considerarse que se rige por el apartado A del precepto mencionado, es decir, por la Ley Federal del Trabajo. Consecuentemente, cuando un trabajador del referido instituto reclame alguna prestación contemplada en la citada ley burocrática, como lo es el quinquenio, no sólo debe demostrar, como requisito sine qua non, que reúne los presupuestos exigidos por la aludida normatividad, sino también que de manera fehaciente el titular del instituto le reconoció expresamente su derecho, ya sea que la cite y se encuentre regulada en el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como sí lo hace respecto de otras prestaciones; o bien, que sólo las mencione y establezca que para su regulación se estará a lo dispuesto en un diverso ordenamiento, pues no basta que en forma genérica se mencione en las condiciones generales de trabajo la obligación del titular de cubrir a los trabajadores todo emolumento al que tengan derecho, en los términos y plazos que se establecen en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, toda vez que las prestaciones como la reclamada, deben entenderse como extralegales.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.



Amparo directo 666/2005. Yocabeth Álvarez Reyes. 17 de febrero de 2005. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Joaquín Zapata Arenas.

### Tesis

**Registro digital:** 178582

**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito

**Novena Época**

**Materia(s):** Laboral

**Tesis:** I.9o.T.198 L

**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

**Tipo:** Aislada

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. TIENEN TAL CARÁCTER QUIENES PROPORCIONAN ASESORÍA AL TITULAR DE UNA DELEGACIÓN POLÍTICA DEL DISTRITO FEDERAL.

El inciso h) de la fracción II del numeral 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ubica como trabajadores de confianza, dentro del Poder Ejecutivo, a los de las dependencias y a los de las entidades comprendidas dentro del régimen del apartado B del artículo 123 constitucional, que desempeñen funciones que conforme a los catálogos a que alude el artículo 20 de dicha ley sean de asesoría o consultoría a los servidores públicos superiores siguientes: secretario, subsecretario, oficial mayor, coordinador general y director general en las dependencias del Gobierno Federal o sus equivalentes en las entidades. Ahora bien, las delegaciones en el Distrito Federal son órganos político-administrativos desconcentrados con autonomía funcional en acciones de gobierno que se encuentran incluidos dentro de la administración pública centralizada del Distrito Federal, y consecuentemente, tal circunstancia determina que el titular de una delegación se equipare a los servidores públicos superiores mencionados en la hipótesis jurídica referida en el citado artículo 5o., por atender asuntos que competen a la administración pública centralizada del Distrito Federal; y, por ende, las personas que le proporcionan asesoría deben ser consideradas como trabajadores de confianza.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 1359/2005. Carlos David Mendoza Topete. 23 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Nilda R. Muñoz Vázquez. Secretario: Francisco E. Orozco Vera.

**Tesis****Registro digital:** 179197**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Administrativa**Tesis:** I.7o.A.347 A**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EN LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 64 DE LA ANTERIOR LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, NO SE REQUIERE LA COMPARECENCIA DEL REPRESENTANTE SINDICAL DE LA DEPENDENCIA DE QUE SE TRATE.

Conforme al artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, cuando el trabajador incurre en alguna de las irregularidades establecidas en los diferentes incisos de la fracción V del artículo 46 de la propia ley, el jefe superior de la oficina debe levantar acta administrativa con la intervención del empleado y un representante del sindicato respectivo, en la cual señale con toda claridad el hecho imputado al trabajador, se hagan constar sus declaraciones y las realizadas por los testigos de cargo y descargo propuestos. El propio numeral prevé que el acta debe ser firmada por las personas que intervengan en la diligencia y dos testigos de asistencia, debiéndose, además, entregar copia de la constancia al empleado y al representante sindical de la dependencia correspondiente; de ahí que no se requiera la presencia de este último en la audiencia celebrada dentro del procedimiento administrativo de responsabilidades, establecido en el artículo 64 de la anterior Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 21, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, ya que a través del mismo no se pretende demostrar la existencia de alguna conducta descrita en el artículo 46, fracción V, de la ley referida, sino que el objeto de la sustanciación es determinar si con la conducta atribuida al servidor público se transgrede algún artículo de la anterior Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, o bien, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, esto es, la instancia administrativa surge con motivo de un vínculo de carácter administrativo derivado de su calidad de servidor público totalmente ajena a la relación de tipo laboral que se tiene con la dependencia citada, supuesto en el cual, de pretenderse afectar aquélla, se requiere la elaboración del acta administrativa en los términos indicados, incluyendo la participación de la representación sindical.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 3607/2004. Efrén Avelino y Granados. 14 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.



## Tesis

**Registro digital:** 179884

**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito

**Novena Época**

**Materia(s):** Administrativa

**Tesis:** I.13o.A.82 A

**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

**Tipo:** Aislada

**INDEMNIZACIÓN. LOS MIEMBROS DE CORPORACIONES POLICIALES NO TIENEN DERECHO A LA. CUANDO SON REMOVIDOS DE SUS CARGOS POR LA REALIZACIÓN DE UNA CONDUCTA ILÍCITA.**

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis de la cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 79/2002, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. EL PÁRRAFO TERCERO DE LA FRACCIÓN XIII DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ADICIONADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE OCHO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, ÚNICAMENTE PROHÍBE LA REINSTALACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES POLICIALES QUE AL MOMENTO DE LA REMOCIÓN NO LLENARON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA EXIGIDOS POR LAS LEYES VIGENTES.", estableció que la reforma al párrafo tercero de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, adicionado por decreto publicado el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, sólo prohíbe la reinstalación de aquellos miembros de las corporaciones policiales que al momento de la remoción no cumplan con los requisitos de permanencia exigidos por las leyes, es decir, cuando el afectado es removido de su empleo, por no cubrir los nuevos requisitos de permanencia exigidos por las leyes vigentes, que no entrañen la realización de una conducta ilícita. Por consecuencia, el derecho a obtener la indemnización a que se refiere el precepto constitucional citado, dependerá de que el afectado obtenga una resolución en la que se determine que la remoción que le fue dictada no deriva de una conducta ilícita, lo que implica que sea necesario que éste promueva un juicio o medio de defensa en contra de dicha remoción, a fin de que se determine esa cuestión, ya que si la remoción derivó de una conducta ilícita, atendiendo a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que se hizo referencia, no es procedente que se otorgue la indemnización, ya que ese Alto Tribunal ha considerado que ésta sólo debe pagarse cuando el afectado no reúna los requisitos de permanencia exigidos por las leyes vigentes en el momento de la remoción, pero no cuando derive de una conducta ilícita.

**DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 143/2004. Guillermo Barrientos Cornejo. 31 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Luz Cueto Martínez. Secretaria: Magaly López Nova.

Nota: La tesis de jurisprudencia citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 356.



**Tesis****Registro digital:** 180222**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito    **Novena Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** I.6o.T.224 L**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. AL NO ESTAR CONTEMPLADA COMO CAUSAL DE CESE LA SUPRESIÓN DE PLAZAS, TIENEN DERECHO A QUE SE LES OTORQUE UNA EQUIVALENTE O A LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, SIN IMPORTAR QUE SEAN DE BASE O DE CONFIANZA.

En términos de la parte final del segundo párrafo de la fracción IX del apartado B del artículo 123 constitucional, en los casos de supresión de plazas los trabajadores al servicio del Estado, sin importar su calidad de base o de confianza, tendrán derecho a que se les otorgue otra plaza equivalente a la suprimida o a la indemnización constitucional, habida cuenta de que tal supresión no está contemplada como causal de cese o de terminación de la relación laboral.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 3556/2004. Secretaría de Turismo. 13 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretaria: Cruz Montiel Torres.

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Precedentes Relevantes, página 670, tesis 1042, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SUPRESIÓN DE PLAZAS POR DESAPARICIÓN DE LA UNIDAD U ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN." y Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 7, Quinta Parte, página 25, tesis de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE DE LOS, POR SUPRESIÓN DE PLAZAS, CON RESPONSABILIDAD PARA EL ESTADO."

Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 224/2007-SS resuelta por la Segunda Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 241/2007, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 220, con el rubro: "SUPRESIÓN DE PLAZAS. LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA NO TIENEN DERECHO A SOLICITAR UNA EQUIVALENTE A LA SUPRIMIDA, O LA INDEMNIZACIÓN DE LEY, EN TÉRMINOS DE LAS FRACCIONES IX Y XIV DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIONES BUROCRÁTICAS FEDERAL Y DE SONORA)."

**Tesis****Registro digital:** 180562**Instancia:** Pleno**Novena Época****Materia(s):** Constitucional,  
Laboral**Tesis:** P./J. 98/2004**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Jurisprudencia

**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. EL HECHO DE QUE PRESTEN SERVICIOS PÚBLICOS O QUE NO PERSIGAN FINES LUCRATIVOS, NO INCIDE EN EL RÉGIMEN LABORAL ENTRE ELLOS Y SUS TRABAJADORES.**

Conforme al artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las relaciones laborales de los miembros de los organismos públicos descentralizados deben regirse por el citado apartado; sin que sea obstáculo el que dichos organismos cuenten con atribuciones para emitir auténticos actos de autoridad que puedan afectar la esfera jurídica de los gobernados, puesto que ello tiene la finalidad de que ejerzan cabalmente sus facultades, las cuales en todo caso persiguen el bien común. En ese sentido, resulta evidente que el hecho de que los organismos públicos descentralizados presten un servicio público o no persigan fines lucrativos, no incide en el régimen laboral entre esas entidades y sus trabajadores, ya que el citado artículo constitucional no prevé distinción alguna, además de que la facultad otorgada al legislador en el apartado B del artículo 123 constitucional es limitativa en tanto le permite expedir leyes en materia de trabajo respecto de las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, y sus respectivos trabajadores, por lo que fuera de esas hipótesis, incluyendo el caso de los organismos descentralizados con funciones de servicio público o que no persigan fines de lucro, las relaciones laborales se regirán por lo dispuesto en el apartado A del propio precepto constitucional.

Acción de inconstitucionalidad 16/2003. Procurador General de la República. 8 de junio de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Agustín Tello Espíndola.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiuno de septiembre en curso, aprobó, con el número 98/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintidós de septiembre de dos mil cuatro.

**Tesis****Registro digital:** 180827**Instancia:** Pleno**Tesis:** P./J. 56/2004**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Laboral**Tipo:** Jurisprudencia

PRIMA DE ANTIGÜEDAD. TRABAJADORES AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO Y SERVICIO POSTAL MEXICANO QUE SUSTITUYERON A ÓRGANOS CENTRALIZADOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. EL PLAZO PARA DICHO BENEFICIO SE COMPUTA A PARTIR DE QUE EMPEZARON A TRABAJAR EN AQUELLOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS.

Los trabajadores que laboraban para la Dirección General de Telégrafos Nacionales o para la Dirección General de Correos, dependientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no tenían derecho a la prima de antigüedad porque sus relaciones laborales se regían por el apartado B del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria (Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado), que no establecen dicho beneficio, pero desde que pasaron a laborar para los organismos públicos descentralizados Telégrafos Nacionales (ahora Telecomunicaciones de México), o Servicio Postal Mexicano, sí tienen derecho a la prima de antigüedad conforme al artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, ya que dicha relación jurídica se rige por la fracción XXXI, inciso b), punto 1, apartado A, del artículo 123 constitucional, conforme a criterios jurisprudenciales de esta Suprema Corte visibles en las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación Tomo II, agosto de 1995, páginas 41, 59 y 60, y Tomo III, febrero de 1996, página 52 (tesis números P./J. 14/95, P./J. 15/95, P./J. 16/95 y P./J. 1/96); por tanto, debe concluirse que el tiempo laborado inicialmente para la administración pública federal centralizada no debe computarse para efectos de la prima de antigüedad, ya que esa prestación no se contiene en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Contradicción de tesis 11/2004. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Noveno Circuito y Primero en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 8 de junio de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Óscar Rodríguez Álvarez.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintitrés de agosto en curso, aprobó, con el número 56/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de agosto de dos mil cuatro.

Nota: Las tesis P./J. 14/95, P./J. 15/95, P./J. 16/95 y P./J. 1/96 citadas aparecen publicadas, respectivamente, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, páginas 41, 59 y 60, con los rubros: "SERVICIO POSTAL MEXICANO. EL ARTÍCULO 16 DEL DECRETO PRESIDENCIAL QUE LO CREO VIOLA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 49 CONSTITUCIONAL.", "TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. EL ARTÍCULO 16 DEL DECRETO PRESIDENCIAL DE CREACIÓN DE DICHO ORGANISMO, EN CUANTO ESTABLECE QUE SUS

RELACIONES LABORALES SE REGIRÁN POR LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, VIOLA EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN." y "TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. SUS RELACIONES LABORALES CON DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO SE RIGEN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN FEDERAL, POR EL APARTADO 'A' DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL."; y Tomo III, febrero de 1996, página 52, con el rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL."

**Tesis****Registro digital:** 180948**Instancia:** Segunda Sala**Novena Época****Materia(s):** Constitucional,  
Laboral**Tesis:** 2a. XLVII/2004**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

BANRURAL. EL ARTÍCULO DECIMOCUARTO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA RURAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DE 2002, QUE ESTABLECE QUE LA RELACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA RELATIVO QUEDARÁ EXTINGUIDA CONFORME A LA "NORMATIVIDAD APLICABLE", NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.

El citado precepto que establece que los trabajadores en activo que al 30 de junio de 2003 laboren en las sociedades nacionales de crédito del Sistema Banrural en liquidación, deberán ser indemnizados y su relación laboral quedará extinguida conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable, no viola la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, pues dentro de esa normatividad se encuentran, entre otros, los artículos 5o., 6o., 18 y tercero transitorio de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. de las Condiciones Generales de Trabajo del Banco Nacional de Crédito Rural y de los Bancos Regionales del Sistema Banrural, que a su vez previenen que a las relaciones laborales existentes entre dichas instituciones y sus trabajadores, se les apliquen las disposiciones contenidas en los Títulos Tercero (Del Escalafón), Cuarto (De la Organización Colectiva de los Trabajadores y de las Condiciones Generales de Trabajo), Séptimo (Del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y del procedimiento ante el mismo), Octavo (De los Medios de Apremio y de la Ejecución de los Laudos) y Décimo (De las Correcciones Disciplinarias y de las Sanciones) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, disposiciones que regulan los procedimientos a través de los cuales los gobernados pueden ser oídos y en los que se les otorga la posibilidad de una oportuna defensa.

Amparo en revisión 434/2004. María del Rocío Cruz Acosta y otros. 2 de julio de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava.



**Tesis****Registro digital:** 181728**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito    **Novena Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** I.13o.T.81 L**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

**HUELGA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL SINDICATO EMPLAZANTE DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 99 Y 100 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.**

El análisis comparativo del procedimiento de huelga que establece la Ley Federal del Trabajo con el diverso establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, permite concluir que a diferencia de la Ley Federal del Trabajo, que establece en sus artículos 920 y 923 que el procedimiento de huelga inicia con la presentación del pliego de peticiones, señalando los requisitos que debe reunir y precisando la actuación que corresponde a la autoridad que debe hacer el emplazamiento y que no dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando éste no sea formulado conforme a los requisitos señalados en el indicado artículo 920, de lo que se colige que la citada ley no exige más requisitos para que proceda el emplazamiento, por lo que las autoridades correspondientes no están facultadas para requerir a un sindicato que acredite que los trabajadores que pretenden emplazar a huelga estén afiliados a dicho sindicato, que proporcione los nombres de los trabajadores que están en servicio y que lo justifique con documentos idóneos; pues la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el artículo 99 establece que para declarar la huelga se requiere: I. Que se ajuste a los términos del artículo 94 de esta ley, es decir, que los trabajadores podrán hacer uso del beneficio de la huelga cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que consagra el apartado B del artículo 123 constitucional; y, II. Que la huelga sea declarada por las dos terceras partes de los trabajadores de la dependencia afectada; asimismo, el artículo 100 de la misma ley determina que antes de suspender las labores los trabajadores deberán presentar al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje su pliego de peticiones con la copia del acta de la asamblea en el que se haya acordado declarar la huelga; por su parte, el precepto 101 de la propia ley dispone que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje decidirá, dentro de un término de setenta y dos horas computado desde la hora en que se reciba copia del escrito acordando la huelga, si ésta es legal o ilegal, según que se hayan satisfecho o no los requisitos a que se refieren los artículos 99 y 100 de la multicitada Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y si la huelga es legal procederá, desde luego, a la conciliación de las partes, siendo obligatoria la presencia de éstas en las audiencias de advenimiento. De ahí que la exigencia de cumplir con los requisitos de referencia condiciona al sindicato huelguista a preparar, previamente a acudir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los elementos que sustenten su acción y que permita al presidente de ese órgano constatar que el accionante contó con la anuencia de las dos terceras partes de los trabajadores para plantear la huelga, gozando para ello de todos los elementos que no sean contrarios a la ley para acreditar los extremos establecidos en los artículos señalados, a fin de que el tribunal pueda pronunciarse sobre la legalidad o no del emplazamiento para que proceda la huelga de los trabajadores al servicio del Estado, una vez que sea calificada de legal.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 213/2004. Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. 20 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretaria: Verónica Beatriz González Ramírez.

**Tesis****Registro digital:** 182069**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito    **Novena Época****Materia(s):** Laboral, Constitucional**Tesis:** VI.T.51 L**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE PUEBLA. EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY QUE LOS RIGE, AL LIMITARLOS CUANDO DEMANDAN LA INDEMNIZACIÓN EN CASO DE SEPARACIÓN INJUSTIFICADA A PERCIBIR ÚNICAMENTE TRES MESES DE SUELDO Y DOS DÍAS POR CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS, Y NO LOS SALARIOS VENCIDOS, CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, SEGUNDO PÁRRAFO Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA.

El artículo 115, fracción VIII, segundo párrafo, de la Constitución General de la República, dispone que las legislaciones laborales que expidan los Congresos de las entidades federativas deben ceñirse a los lineamientos que se establecen en el artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias (Ley Federal del Trabajo y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado); precepto constitucional que, en su apartado B, fracción IX, instituye que en caso de separación injustificada el trabajador tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente; a su vez, en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria de ese apartado B, se preceptúa en el artículo 43, fracción IV, que si el trabajador demanda la indemnización debe cubrirse ésta, así como el pago de sueldos o salarios caídos, entre otros; por tanto, es de concluirse que el artículo 43 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla contraviene el artículo 115, fracción VIII, segundo párrafo, constitucional y demás disposiciones a las que remite, en cuanto establece que cuando el Tribunal de Arbitraje califique como injusta la causa del cese, el trabajador podrá optar entre ser reinstalado en su puesto con derecho a percibir los salarios caídos, o bien, por el pago de una indemnización de tres meses de sueldo y sólo dos días de salario por cada año de servicios prestados, pues, con ello, el precepto aludido priva a los trabajadores burocráticos de la posibilidad de obtener el pago de salarios vencidos cuando opten por demandar la indemnización mencionada.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 516/2003. María Antonia Pérez Tomay. 9 de diciembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Rolando Nicolás de la A. Romero Morales. Secretario: Luis Rubén Baltazar Cedeño.

Nota:

El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia, en términos del punto 11 del capítulo primero del título cuarto del Acuerdo Número 5/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación, y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia

emitida por la Suprema Corte.

Por ejecutoria del 2 de mayo de 2016, el Pleno en Materia de Trabajo del Sexto Circuito declaró improcedente la contradicción de tesis 1/2016 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se apartó del criterio en contradicción, al plasmar uno diverso en posterior ejecutoria.

Este Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en su actual denominación e integración, abandonó el criterio sostenido en esta tesis, al resolver el amparo directo 471/2014, en el que en relación con el tema de la tesis abandonada, señaló que la decisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla fue la correcta al absolver al Ayuntamiento Constitucional de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, al pago de salarios vencidos, ya que el artículo 43 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla sólo contempla el pago de dos días de salario por cada año de servicios prestados, pues debía atenderse que el criterio sostenido en aquélla ha sido superado por la jurisprudencia 2a./J. 68/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA PARA REGULAR SUS RELACIONES LABORALES EN LO QUE NO CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Tomo 1, mayo de 2013, página 636.

**Tesis****Registro digital:** 182339**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito    **Novena Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** XIX.5o.5 L**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

**PRIMA DE ANTIGÜEDAD. TIEMPO QUE DEBE COMPUTARSE PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO.**

Si los actores iniciaron a laborar para la Dirección General de Telégrafos Nacionales, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se regían por el apartado B del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria (Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado); y posteriormente, a partir del veinte de agosto de mil novecientos ochenta y seis, pasaron a laborar para el organismo público descentralizado Telégrafos Nacionales, ahora Telecomunicaciones de México, rigiéndose a partir de esa fecha por el apartado A del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria (Ley Federal del Trabajo); por tanto, el tiempo laborado inicialmente para la administración pública federal centralizada no debe computarse para efectos de la prima de antigüedad, porque esa prestación no se contiene en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En efecto, no existe en la especie ningún derecho adquirido por parte de los actores en el juicio laboral que permita computar el tiempo laborado para la patronal cuando ésta era parte de la administración pública centralizada como antigüedad para efectos de la prima de antigüedad prevista en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, porque ese derecho surgió a partir del veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y seis, cuando la patronal Estado centralizado pasó a ser sustituida por un organismo público descentralizado, pues si bien conforme a lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto de creación del citado organismo público descentralizado Telégrafos Nacionales, ahora Telecomunicaciones de México, como patrón sustituto adquirió la obligación de respetar los derechos laborales de los trabajadores de la Dirección General de Telégrafos Nacionales, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo cierto es que no puede hablarse de que el patrón sustituto, organismo público descentralizado, tenga la obligación de respetar el cómputo de la antigüedad generada por los trabajadores para los efectos de la prima de antigüedad, si ese derecho no existía en la esfera jurídica de los trabajadores cuando prestaban sus servicios al Gobierno Federal central, sino que, surgió con la sustitución misma de la patronal.

**QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.**

Amparo directo 497/2003-Telecomunicaciones de México. 10 de diciembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Pablo Hernández Garza. Secretaria: Hilda Irma Guerrero Herrera.

Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 11/2004-PL resuelta por el Tribunal Pleno, de la que derivó la tesis P./J. 56/2004, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, agosto de 2004, página 6, con el rubro: "PRIMA DE

ANTIGÜEDAD. TRABAJADORES AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO Y SERVICIO POSTAL MEXICANO QUE SUSTITUYERON A ÓRGANOS CENTRALIZADOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. EL PLAZO PARA DICHO BENEFICIO SE COMPUTA A PARTIR DE QUE EMPEZARON A TRABAJAR EN AQUELLOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS."

**Tesis****Registro digital:** 182762**Instancia:** Segunda Sala**Novena Época****Materia(s):** Constitucional,  
Laboral**Tesis:** 2a. CXL/2003**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 17 DE ENERO DE 1998, QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA, NO VIOLA LA FRACCIÓN XIV DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Si bien es cierto que el mencionado precepto constitucional al prever que los trabajadores de confianza disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, limita los derechos que a tales trabajadores les corresponde, también lo es que no prohíbe que puedan establecerse otros derechos en su beneficio, pues sólo consagra las bases mínimas de protección a los trabajadores para asegurar su tranquilidad personal y el bienestar de su familia, como cuestiones esenciales que deben ser respetadas, las cuales servirán de sustento para la creación de las leyes reglamentarias respectivas, máxime que dicho dispositivo constitucional no señala que éstas deben ajustarse de manera exacta a la propia Constitución Federal. En consecuencia, basta que la Ley Fundamental faculte expresamente a los Poderes Legislativos de los Estados para legislar sobre las relaciones entre los Estados y los Municipios con los trabajadores a su servicio, para que tengan libertad de dictar las normas que consideren convenientes, sujetándose a las bases que al respecto establezca el apartado B del artículo 123 constitucional, por lo que el artículo 8o. de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que establece el derecho a la estabilidad en el empleo de los trabajadores de confianza al servicio del Estado, no viola la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Carta Magna.

Amparo directo en revisión 940/2003. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Estado de Jalisco. 19 de septiembre de 2003. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.



### Tesis

**Registro digital:** 182942

**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito

**Novena Época**

**Materia(s):** Laboral

**Tesis:** II.T.256 L

**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

**Tipo:** Aislada

SÉPTIMO DÍA. CASO EN EL QUE ES IMPROCEDENTE SU PAGO A PESAR DE HABERSE LABORADO LOS DOMINGOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

De conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios "por cada seis días de trabajo el servidor público disfrutará de uno de descanso con goce de sueldo íntegro", razón por la que no es dable pretender el pago del séptimo día por el solo hecho de haber laborado los domingos, cuando se tengan turnos de veinticuatro horas de trabajo por otras veinticuatro de descanso, es decir, se trabajaban tres días en una semana y cuatro en la siguiente, pues ello sólo implica, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 123 constitucional, apartado B, fracción I y en los numerales 59, 60 y 64 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, el derecho a percibir los emolumentos que retribuyan los servicios prestados en exceso a la jornada legal, que por definición constitucional deben ser considerados como tiempo extraordinario.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 130/2003. Félix Samuel Hernández Sánchez. 25 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Guzmán Barrera. Secretario: Raúl Díaz Infante Vallejo.

**Tesis****Registro digital:** 183215**Instancia:** Segunda Sala**Tesis:** 2a./J. 83/2003**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Laboral**Tipo:** Jurisprudencia

REINSTALACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO. LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 150 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

El precepto mencionado, que dispone textualmente: "Prescriben en dos meses las acciones para exigir la indemnización que este Código concede por despido injustificado, a partir del momento de la separación o la reposición en el puesto del que fue separado.", prevé la acción de reinstalación a favor de los trabajadores despedidos injustificadamente. Lo anterior es así, en primer lugar, porque la conjunción disyuntiva "o" debe entenderse como partícula gramatical de unión entre los términos "indemnización" y "reposición", pues vincula conceptos de una oración que tienen la misma posición gramatical. De ahí que las acciones para exigir la indemnización o la reposición en el puesto de trabajo prescriben en dos meses, a partir del momento de la separación. En segundo lugar, porque en el supuesto referido el vocablo "reposición" está usado como sinónimo de reinstalación, en cuanto involucra la idea de repetición, de volver al estado original; y, en tercer lugar, porque el contenido del artículo 150 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua es concordante con lo dispuesto en los artículos 116, fracción VI y 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen, en su orden, que las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se rigen por lo que dispongan las Legislaturas Estatales, con base en lo previsto en el artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias, que en el apartado y fracción mencionados señala expresamente el derecho que tienen los trabajadores al servicio del Estado de pedir la reinstalación en su trabajo.

Contradicción de tesis 69/2003-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado del mismo circuito. 29 de agosto de 2003. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Delgado Durán.

Tesis de jurisprudencia 83/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cinco de septiembre de dos mil tres.

**Tesis****Registro digital:** 184238**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** XVII.2o.73 L**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

**ACCIÓN DE REINSTALACIÓN. EL ARTÍCULO 150 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SÍ LA CONTEMPLA.**

De la redacción del artículo 150 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, que a la letra establece: "Prescriben en dos meses las acciones para exigir la indemnización que este código concede por despido injustificado, a partir del momento de la separación o la reposición en el puesto del que fue separado.", se advierte que sí contempla la acción de reinstalación, dado que de su interpretación literal resulta que los trabajadores de base al servicio del Estado de Chihuahua pueden exigir, en un término de dos meses, la indemnización que ese código concede por despido injustificado, contados desde el momento en que hubieren sido separados, o bien, para exigir, dentro del mismo plazo, que sean repuestos en el cargo del que se les separó sin justa causa, hipótesis legal esta que constituye el derecho de los trabajadores para reclamar su reinstalación en el empleo, pues los vocablos "reinstalar" y "reponer" son sinónimos, y el prefijo "re" significa "volver a", de manera que la palabra "reponer" indica "volver a poner" y la expresión "reinstalar" significa "volver a instalar"; por tanto, no hay duda de que ese numeral al establecer que: "Prescriben en dos meses las acciones para exigir la indemnización que este código concede por despido injustificado ... o la reposición en el puesto del que fue separado.", reconoce la acción de reinstalación. Estimar lo contrario llevaría a concluir que se dejó de observar lo dispuesto por el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política Mexicana, que establece que las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se rigen por lo que establezcan las Legislaturas Estatales, tomando como base el artículo 123 constitucional, mismo que en su apartado B, fracción IX, preceptúa que los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la ley y que en caso de separación injustificada tendrán derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento de ley. En todo caso, con independencia de que pudiese o no establecerse en el Código Administrativo del Estado el derecho de los trabajadores de que se trata para ser reinstalados en su puesto, debe prevalecer lo ordenado sobre el particular por la Constitución General de la República.

**SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.**

Amparo directo 49/2003. 7 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dávila Gaona. Secretaria: Sara Olivia González Corral.

Nota: El criterio contenido en esta tesis contendió en la contradicción de tesis 69/2003-SS, resuelta por la Segunda Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 83/2003, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, septiembre de 2003, página 486, con el rubro: "REINSTALACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO. LA ESTABLECE EL



ARTÍCULO 150 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA."

**Tesis****Registro digital:** 184378**Instancia:** Tribunales Colegiados  
de Circuito**Novena Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** I.6o.T.169 L**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY QUE LOS RIGE, NO CONTRAVIENE EL SEGUNDO PÁRRAFO Y APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

De la lectura del artículo 3o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que dispone: "Trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales.", se puede afirmar que éste regula la relación jurídica del Estado con sus trabajadores, la cual nace por el nombramiento expedido por aquél a éstos y no de la simple prestación de servicios porque el Estado no celebra contratos de trabajo con sus servidores, sino únicamente les confiere nombramientos, sin que dichos presupuestos limiten en modo alguno el derecho que tiene toda persona al trabajo digno y socialmente útil que consagra el artículo 123 constitucional, porque el legislador Constituyente, al establecer en su segundo párrafo la frase: "El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: ... B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores ...", facultó expresamente al legislador ordinario para que estableciera los requisitos a fin de ser considerado como trabajador al servicio del Estado.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 576/2003. María Guadalupe Rueda Montiel y otro. 20 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Elia Adriana Bazán Castañeda.

**Tesis****Registro digital:** 185297**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito    **Novena Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** I.13o.T.11 L**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDA EN LA FRACCIÓN IX DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, AL EXCLUIR A LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.

Al prever la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado la exclusión de los trabajadores de confianza de ese régimen en su artículo 8o., no transgrede la garantía de seguridad jurídica contenida en la fracción IX del apartado B del artículo 123 constitucional. Ello, porque de una interpretación armónica y sistemática de las fracciones que conforman dicho apartado, se desprende que si bien la fracción IX establece que los trabajadores al servicio del Estado sólo podrán ser cesados por causa justificada en los términos que fije la ley, que en caso de separación injustificada tendrán derecho a optar por la reinstalación o indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal y que en casos de supresión de plazas tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente, dicha disposición debe entenderse en el contexto integral de las fracciones que conforman el apartado referido, es decir, partiendo de la existencia de trabajadores de base y de confianza, que las fracciones I a XI contemplan los derechos mínimos que deben recibir esos trabajadores derivados del salario, de la seguridad social y del derecho de asociación a cambio de la prestación de sus servicios; de la competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para conocer de los conflictos laborales que puedan ocurrir entre los titulares de las dependencias que conforman los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal con sus trabajadores, y dentro de los cuales no pueden quedar comprendidos los casos de exclusión que se precisan en las fracciones XII, XIII y XIV, relativas a los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores; los miembros de los cuerpos de seguridad pública, militares, marinos y personal del servicio exterior que se rigen por sus propias leyes; y los trabajadores de confianza, respectivamente. De ahí que si la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional precisa que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y su postulado se refleja en la hipótesis contenida en el artículo 5o. de la ley reglamentaria de dicho apartado, y en su numeral 8o. se excluye del régimen de esa ley a los trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 5o., esta disposición no transgrede la garantía de seguridad jurídica establecida en la Carta Magna.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 18433/2002. Marco Antonio Alvarado Curiel. 18 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: Juan Antonio Ávila Santacruz.

**Tesis****Registro digital:** 185428**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito    **Novena Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** III.2o.T.71 L**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

**COMPETENCIA. SE SURTE EN FAVOR DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE JALISCO, TRATÁNDOSE DE CONFLICTOS ENTRE EL PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y SUS TRABAJADORES.**

El organismo público descentralizado que se denomina "Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara" fue creado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el seis de julio de mil novecientos ochenta y nueve, el cual dispone, en su artículo 1o., in fine, que dicho organismo estará sectorizado a la Secretaría de Turismo del Estado y, en su artículo 16, que las relaciones de trabajo del patronato con sus servidores, se regirán por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; asimismo, la aludida ley en su precepto 114 establece que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco será competente para resolver las controversias que se susciten entre los organismos descentralizados y sus servidores; sin embargo, esa situación no debe llevar a determinar competente al tribunal referido para dirimir estos conflictos, ya que éste únicamente puede resolver las controversias que se susciten entre el Gobierno del Estado y sus trabajadores, pero no respecto de aquellas en que se involucren organismos descentralizados, los cuales no pueden estar sujetos a una legislación burocrática estatal. Lo anterior es así, en razón de que de la interpretación conjunta y sistemática de las disposiciones de la Constitución Federal contenidas en los artículos 73, fracción X, 116, fracción VI, 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1 y apartado B, se desprende que el Congreso de la Unión cuenta con la facultad exclusiva para legislar en materia de trabajo en general y, adicionalmente, respecto de las relaciones de trabajo burocráticas en el ámbito federal, en tanto que las Legislaturas de los Estados sólo están autorizadas constitucionalmente para expedir leyes reglamentarias que rijan las relaciones laborales entre los Poderes Locales y sus trabajadores, esto siguiendo las bases que establece el apartado B del artículo 123 constitucional, en relación con el numeral 116, fracción VI, de la misma Carta Magna, siendo claro que lo relativo a las relaciones de trabajo entre las empresas que sean administradas de forma descentralizada por los Gobiernos tanto Federal como de los Estados, deben regirse por la legislación reglamentaria del apartado A del referido numeral 123 constitucional, tal como se advierte del punto 1, inciso b), fracción XXXI, de ese apartado, no pudiendo incluirse tal reglamentación en las leyes burocráticas locales, lo que al hacerse transgrede las disposiciones expresas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en esa materia, concluyéndose que debe ser una Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dentro de su ámbito territorial, la que conozca de los conflictos entre este tipo de organismos y sus empleados. La anterior conclusión coincide con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su actual integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, febrero de 2000, con el número de tesis 2a./J. 13/2000, en la página 62, que resolvió un caso similar, cuya voz es la siguiente: "COMPETENCIA. SE SURTE A FAVOR DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE TRATÁNDOSE DE CONFLICTOS ENTRE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS



TRABAJADORES.".

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

Competencia 6/2002. Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, ambos del Estado de Jalisco. 6 de septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Gómez Ávila. Secretario: José Ignacio Rodríguez Sánchez.

**Tesis****Registro digital:** 188041**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito    **Novena Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** XXI.1o.87 L**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL Y MIEMBROS DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL ESTADO DE GUERRERO. SU CLASIFICACIÓN COMO TRABAJADORES DE CONFIANZA, CONFORME A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, APLICADA EN FORMA SUPLETORIA A LA LEY DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD, NO ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS.

En los términos del artículo 15 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, los trabajadores de los poderes del Estado se clasificarán conforme a lo señalado en el catálogo general de puestos del Gobierno del Estado; sin embargo, como dicho catálogo no existe, debe aplicarse supletoriamente la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, según lo ordena el artículo 9o. de la ley primeramente mencionada. Consecuentemente, la clasificación de los agentes de la policía judicial y los miembros de la policía preventiva como trabajadores de confianza, conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción II, inciso I), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, aplicada en forma supletoria a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, no es violatoria de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque tal supletoriedad tiene su fundamento precisamente en lo preceptuado en el citado artículo 9o. y, además, porque se satisfacen los requisitos para que opere la supletoriedad de una ley, a saber: a) que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale el estatuto supletorio; b) que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate; c) que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria; y, d) que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 401/2001. Álvaro Homero Palma García. 12 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Margarito Medina Villafañá. Secretario: José Alberto Torreblanca Cortés.

### Tesis

**Registro digital:** 188108

**Instancia:** Tribunales Colegiados  
de Circuito

**Novena Época**

**Materia(s):** Laboral

**Tesis:** I.9o.T.139 L

**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.

**Tipo:** Aislada

**RÉPLICA. ESTA FIGURA NO ESTÁ PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.**

Dicha ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, regula el procedimiento a seguir para resolver las controversias que se someten ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, procedimiento que en términos del artículo 127 del citado ordenamiento legal se reduce a la presentación de la demanda, su contestación y a una sola audiencia, en la que se reciben pruebas y alegatos y se pronuncia resolución (salvo cuando a juicio del tribunal se requiera la práctica de diligencias, en cuyo caso se ordenará su desahogo y hecho esto se dictará laudo); de ahí que es incorrecto que la contraparte pretenda que deben tenerse por admitidas las imputaciones formuladas en la contestación de la demanda, ante la falta de manifestación al respecto por la parte actora, porque la referida legislación no prevé la figura de la réplica.

**NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo directo 15909/2001. Titular del Banco de Crédito Rural del Pacífico Sur, S.N.C. 17 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Nilda R. Muñoz Vázquez. Secretario: Francisco E. Orozco Vera.

**Tesis****Registro digital:** 189283**Instancia:** Segunda Sala**Tesis:** 2a. CV/2001**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Constitucional**Tipo:** Aislada

POLICÍAS. LA IMPOSIBILIDAD DE OBTENER SU REINSTALACIÓN EN EL CARGO, ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO TERCERO DE LA FRACCIÓN XIII DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN, NO ES APLICABLE RESPECTO DE AQUELLOS QUE FUERON CESADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA RESPECTIVA (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL OCHO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE).

De la interpretación literal, causal y teleológica de lo dispuesto en el citado precepto constitucional se advierte que la imposibilidad de reinstalar a los miembros de las instituciones policiales federales, estatales o municipales que hubieran sido removidos de su cargo, únicamente es aplicable hacia el futuro ya que, por una parte, en el referido numeral se estableció que "... podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción ...", lo que conlleva a considerar que la imposibilidad de obtener la reinstalación es una restricción que únicamente opera respecto de los que sean cesados en ejercicio de la facultad incorporada en el texto constitucional y, por otra, si bien en la respectiva iniciativa de reformas constitucionales presentada por el presidente de la República se proponía un artículo tercero transitorio conforme al cual "... las resoluciones de los procedimientos en trámite, incluyendo los juicios de amparo, en que se hubieran impugnado los actos de cese, remoción, baja o destitución, en ningún caso podrán tener por efecto la restitución o reinstalación en las plazas, cargos o comisiones que ocupaban ...", de especial relevancia resulta el proceso legislativo que siguió a dicha iniciativa, pues con base en los dictámenes emitidos por las comisiones respectivas, tanto de la Cámara de Senadores como de la de Diputados, en el texto aprobado por éstas y, posteriormente, por las Legislaturas Locales, se suprimió la referida norma de tránsito, porque a juicio de ambas Cámaras, de aprobarse en sus términos la propuesta presidencial, se crearían situaciones de franco enfrentamiento entre los Poderes Judicial y Ejecutivo, al tener que desobedecer este último una disposición expresa de aquél. En tal virtud, los referidos elementos hermenéuticos generan convicción en cuanto a que la intención del Poder Revisor de la Constitución plasmada en el párrafo tercero de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, se traduce en que a partir de su entrada en vigor las autoridades competentes en el ámbito federal, local o municipal, pueden cesar a los integrantes de los cuerpos policiacos cuando no cumplan con los requisitos que las leyes vigentes al momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que la impugnación que de tales remociones se realice pueda dar lugar a su reinstalación, es decir, esta última restricción solamente es aplicable respecto de los policías cesados a partir del nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

Inconformidad 357/2001. Juan Carlos Amador Alvarado. 25 de mayo de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael



Coello Cetina.

**Tesis****Registro digital:** 189692**Instancia:** Segunda Sala**Tesis:** 2a. XLVII/2001**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Laboral**Tipo:** Aislada

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.

De nuevas consideraciones esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide apartarse del criterio contenido en la tesis aislada 2a. XXVI/99, visible en la página 311 del Tomo IX, del mes de marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "COMPETENCIA LABORAL. RADICA EN LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUANDO UN TRABAJADOR AL SERVICIO DEL ESTADO DEMANDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EL RECONOCIMIENTO DE UN RIESGO DE TRABAJO Y EL PAGO DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE.", en cuyos precedentes se estimó que la competencia para conocer de los juicios en los que se demanda una prestación de seguridad social al referido instituto debe recaer necesariamente en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, atendiendo al hecho de que ese instituto es un organismo descentralizado y a que, conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia, las relaciones laborales de los organismos de esa naturaleza con sus trabajadores deben regirse por el apartado A del artículo 123 constitucional. Ante tal criterio, de un nuevo análisis sobre la referida cuestión jurídica, esta Segunda Sala arriba a la conclusión de que para determinar a qué órgano jurisdiccional corresponde conocer del juicio en el que se demanda una prestación de seguridad social al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe atenderse al régimen constitucional y legal que rige el vínculo laboral del cual deriva como una consecuencia directa la diversa relación jurídica que se entable entre el trabajador y esa entidad de seguridad social. Al efecto, debe tomarse en cuenta que las prestaciones de esa naturaleza como son, entre otras, el pago de indemnizaciones, pensiones, servicios, asistencias médicas, quirúrgicas o farmacéuticas si bien derivan directamente de la relación jurídica que por disposición legal se entable entre ese organismo y los trabajadores o sus beneficiarios, la misma tiene su origen en la existencia del vínculo laboral que se da entre el respectivo trabajador y la correspondiente dependencia o entidad de la administración pública, generalmente federal, por lo que aquel vínculo es derivado de la relación laboral entablada; de ahí que, para determinar qué órgano jurisdiccional es el competente para conocer de los juicios laborales en los que se demanden las referidas prestaciones debe atenderse al régimen constitucional y legal que regula la respectiva relación jurídica laboral, dado que la relación derivada o accesoria debe regirse por el régimen constitucional y legal que norma a la relación jurídica principal. En esa medida, si un trabajador que presta sus servicios para alguno de los Poderes de la Unión, o de las entidades federativas, demanda al mencionado instituto el pago de una prestación principal, debe estimarse que al encontrarse regulada la respectiva relación laboral por el apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República o bien por la correspondiente ley burocrática local, en términos del diverso 116, fracción VI, de la propia Norma Fundamental, la

competencia para conocer de tal juicio corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; al tenor del mismo criterio, si como consecuencia del fenómeno de la descentralización de la prestación de servicios, un organismo descentralizado sustituye en su carácter de patrón al titular de alguna dependencia de la administración pública centralizada, ello dará lugar a que ese vínculo jurídico ya no se rija por el apartado B del artículo 123 constitucional ni, en su caso, por la respectiva legislación burocrática local, sino por el régimen que deriva de lo dispuesto en el apartado A del citado precepto fundamental, lo que implicará que la competencia para conocer tanto de los conflictos estrictamente laborales que se susciten, como de los surgidos dentro de las relaciones jurídicas derivadas directamente de ese vínculo laboral, se sustancien ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de ahí que a este órgano jurisdiccional corresponde conocer del juicio en el que un trabajador de un organismo descentralizado, de cualquier nivel de gobierno, demanda el pago de una prestación principal al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; destacando, además, que el referido criterio genera certeza a los trabajadores sobre el órgano jurisdiccional competente para conocer de los juicios que entablen en contra de su patrón equiparado y del referido instituto, aunado a que con el mismo se respeta íntegramente la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia relativa a que las relaciones laborales entre un organismo descentralizado y sus trabajadores deben regirse por el apartado A del artículo 123 constitucional y, por ende, los conflictos que entre ellos se susciten serán de la competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pues el caso en análisis no versa sobre la demanda intentada en contra del mencionado instituto por sus trabajadores, hipótesis que se rige por la diversa tesis jurisprudencial visible en la página 153 del Tomo III, del mes de mayo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "COMPETENCIA LABORAL. DEBE DECLARARSE A FAVOR DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUANDO SE DEMANDA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO."

Competencia 312/2000. Suscitada entre el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Toluca y la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal. 2 de marzo de 2001. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

Nota: Este criterio ha sido abandonado parcialmente por la tesis 2a./J 111/2005, de rubro "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD."



**Tesis****Registro digital:** 190283**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito**Novena Época****Materia(s):** Administrativa**Tesis:** X.3o.6 A**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

POLICÍAS, LA PROHIBICIÓN DE REINSTALACIÓN DE LOS, NO HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO.

Una correcta intelección de lo dispuesto en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 constitucional, permite concluir que la mera circunstancia de que el citado precepto disponga que tratándose de los policías y miembros de los cuerpos de seguridad, no procede la reinstalación como medio de restitución en el goce de la garantía violada, sea cual fuere el juicio o medio de defensa para combatir la remoción, ello, de suyo, no hace improcedente el juicio de garantías, porque la citada norma no tiene como finalidad escapar este tipo de acto de autoridad de algún juicio o medio de defensa ordinario, ni tampoco puede deducirse que con esto se proscriba el juicio de amparo, sino que si las resultas del medio de defensa, incluso del juicio constitucional, son considerar a la destitución del empleo como un acto carente de legalidad, la protección no puede tener como finalidad la reinstalación del quejoso en su empleo, sino ordenar a la autoridad que lo indemnice. Esto, porque la disposición constitucional no viene a vedar la promoción de medio de defensa alguno contra el citado acto de autoridad, sino más bien, regular el resultado cuando se considere ilegal la destitución.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 121/2000. Derki Cerna Leeder. 11 de octubre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Rodríguez Bastar. Secretario: Luis A. Palacio Zurita.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, página 339, tesis 2a./J. 25/2000, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA ADICIÓN DEL PÁRRAFO TERCERO DE LA FRACCIÓN XIII, APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE OCHO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, NO IMPIDE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE REMOCIÓN DE SUS ELEMENTOS".

**Tesis****Registro digital:** 191348**Instancia:** Pleno**Novena Época****Materia(s):** Constitucional,  
Laboral**Tesis:** P. CXXVII/2000**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

**SINDICATOS. EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO QUE PROHÍBE LA REELECCIÓN DE SUS DIRIGENTES, CONTRAVIENE LA LIBERTAD SINDICAL QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.**

Este precepto, en su apartado B, fracción X, establece, entre otros principios básicos, que los trabajadores al servicio del Estado tienen el derecho de asociarse para la defensa de sus derechos comunes, garantía que esta Suprema Corte ha interpretado con toda amplitud que es acorde con el espíritu libertario del Constituyente, por lo cual ha de entenderse que tienen derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes, de afiliarse a ellas conforme a sus estatutos, con base en los cuales pueden elegir libremente a sus representantes, señalando el tiempo que deben durar en sus cargos, así como organizar su administración, actividades y programas de acción, sin que se admita prohibición o limitante alguna en relación con la elección de sus dirigentes o con el término que éstos deben durar en sus cargos, debiendo advertirse que el convenio internacional número 87, aprobado por el Senado de la República, y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de octubre de mil novecientos cincuenta, coincide plenamente con este principio constitucional. Por tanto, como el artículo 75 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que "Queda prohibido todo acto de reelección dentro de los sindicatos.", ha de concluirse que tal prohibición viola la citada libertad sindical al intervenir en la vida y organización interna de los sindicatos, pues impide el ejercicio del derecho de las organizaciones sindicales para que elijan libremente a sus representantes y para que puedan actuar en forma efectiva e independiente en defensa de los intereses de sus afiliados, sin que pase inadvertido para la Suprema Corte que la reelección de dirigentes sindicales que el artículo impugnado prohíbe, es un derecho libertario que si es mal ejercido puede estratificar clases dominantes dentro de los propios trabajadores con todos los vicios que como consecuencia suelen darse, pero el impedimento de tan deplorable e indeseado resultado, no puede lograrse mediante la restricción de las libertades sindicales que otorga nuestra Constitución, sino a través del ejercicio responsable, maduro y democrático que los propios trabajadores hagan de sus derechos.

Amparo en revisión 572/2000. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 13 de junio de 2000. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en curso, aprobó, con el número CXXVII/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a once de julio de dos mil.



**Tesis****Registro digital:** 191855**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito    **Novena Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** XX.1o.95 L**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

INSCRIPCIÓN AL ISSSTECH. ES COMPETENTE EL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO PARA CONOCER DE ESTA PRESTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).

La prestación relativa a inscripción y registro al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado deriva de la relación obrero-patronal, en virtud de que encuentra sustento legal en el apartado B del artículo 123 constitucional, así como en la Ley del Servicio Civil del Estado y sus Municipios, en su artículo 39, fracción II, el cual dispone que es un derecho de los trabajadores y sus familiares, disfrutar de las prestaciones y beneficios de seguridad social, por los motivos, condiciones y términos establecidos en la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, y conforme al numeral 42, fracción VI, del primero de los ordenamientos legales citados, en una obligación de la parte patronal cubrir las aportaciones correspondientes, para que el trabajador goce de las mismas. En esas condiciones, es evidente que el Tribunal del Servicio Civil, es competente para conocer respecto de esta prestación, en razón de que, al originarse la inscripción y registro ante el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, por la existencia de una relación de tipo laboral entre el Estado y sus trabajadores, quien debe resolver respecto de la procedencia de la misma lo es un tribunal de trabajo, en el caso el Tribunal del Servicio Civil del Estado. Lo anterior con independencia de que la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, sea de índole administrativa y, que en su artículo 5o. establezca que a quien corresponde su aplicación y cumplimiento es al propio instituto, pues con tal determinación no se afectan las facultades que la ley de la materia le otorga al organismo citado, ya que éste conserva sus facultades para determinar en su momento si la inspección respectiva, resulta o no procedente, previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se exijan.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

Amparo directo 735/99. José Luis Mendoza Delgado y otros. 1o. de diciembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Noé Gutiérrez Díaz, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Magdalena Barrón Benítez.

Nota: El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver en sesión de 1o. de diciembre de 1999 el amparo directo 735/99 decidió apartarse del criterio contenido en "... la ejecutoria dictada con fecha quince de agosto de mil novecientos noventa y seis, por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo número 1083/95, promovido por Carlos Cozar Zúñiga, relativo al expediente laboral número 49/B/95, ya que atendiendo a las consideraciones

expuestas con antelación la actual integración de este cuerpo colegiado, se aparta de dicho criterio por no compartirla.".

## Tesis

**Registro digital:** 191925

**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito    **Novena Época**

**Materia(s):** Laboral

**Tesis:** I.5o.T.198 L

**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

**Tipo:** Aislada

COMPETENCIA LABORAL. A QUIÉN CORRESPONDE CUANDO SE DEMANDA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

Si la relación de trabajo se da entre un funcionario y uno de los órganos del Poder Legislativo Federal, que es a quien se le exigen las prestaciones, es de concluirse que en el caso concreto, se surte la hipótesis competencial consignada en el apartado B, fracción XII, del artículo 123 constitucional, por lo que del conflicto deberá conocer el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Competencia 5/2000. Suscitada entre la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 4 de abril de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Barredo Pereira. Secretario: Martín Borrego Dorantes.

**Tesis****Registro digital:** 191974**Instancia:** Pleno**Novena Época****Materia(s):** Constitucional,  
Administrativa**Tesis:** P. LII/2000**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

SEGURIDAD PÚBLICA. LA LEY QUE RIGE LAS RELACIONES DE SUS ELEMENTOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.

La Ley de Seguridad Pública del Estado de México, que establece las bases para regular las relaciones entre el Gobierno del Estado y los miembros de los cuerpos de seguridad pública, no es inconstitucional por el hecho de no establecer a favor de éstos los derechos que las fracciones I y II del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal consagran para los trabajadores al servicio del Estado, como son el pago de tiempo extraordinario y vacaciones, en virtud de que su relación es de naturaleza administrativa y de que para legislar respecto de las relaciones de los Poderes Estatales con los elementos de dichos cuerpos de seguridad, debe entenderse que los Congresos Locales no se encuentran obligados a seguir los lineamientos establecidos en el apartado B del precepto citado, porque dicho numeral, en su fracción XIII, expresamente excluye de su ámbito de aplicación a esa clase de servidores públicos.

Amparo directo en revisión 1036/97. Sabino Flores Benítez y coags. 14 de octubre de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, José Vicente Aguinaco Alemán y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretario: Ernesto Martínez Andreu.

Amparo directo en revisión 1347/98. Jorge Hernández Cerón y coags. 14 de octubre de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, José Vicente Aguinaco Alemán y Humberto Román Palacios. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número LII/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.



**Tesis****Registro digital:** 192281**Instancia:** Segunda Sala**Tesis:** 2a./J. 25/2000**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Administrativa**Tipo:** Jurisprudencia

SEGURIDAD PÚBLICA. LA ADICIÓN DEL PÁRRAFO TERCERO DE LA FRACCIÓN XIII, APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE OCHO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, NO IMPIDE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE REMOCIÓN DE SUS ELEMENTOS.

Es inexacto que el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 80 de la Ley de Amparo y 123, apartado B, fracción XIII, párrafo tercero constitucional adicionado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, establezca la improcedencia del amparo contra la orden de remoción de un elemento de los cuerpos de seguridad pública, cuando no cumplan la normatividad vigente en la fecha de la remoción para permanecer en el cargo, pues del desarrollo del proceso legislativo que motivó la reforma no se infiere que haya sido intención del Constituyente Permanente proscribir el juicio de garantías contra la remoción de un elemento de los cuerpos de seguridad pública de cualquier nivel de gobierno. Además, el texto constitucional en la forma como en definitiva quedó redactado, no prohíbe la procedencia del amparo, pues de haber sido así, no hubiera señalado la posibilidad de atacar esa determinación a través de juicio o medio de defensa, como expresamente señala; de modo que como tal determinación constituye un acto de autoridad, es evidente que puede, válidamente, ser combatido a través del amparo y del hecho de que la única prerrogativa que, en su caso, les conceda la Carta Fundamental a esos servidores públicos sea la indemnización, no les impide someter al juicio de amparo la determinación de la constitucionalidad de la remoción, pues precisamente de ello dependerá el esclarecimiento de ese derecho. Por lo tanto, si la improcedencia del juicio de garantías constituye un obstáculo que impide al juzgador resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ha de concluirse que el derecho a la indemnización en vez del derecho a la reinstalación de un elemento de los cuerpos de seguridad pública, no produce la improcedencia del amparo.

Contradicción de tesis 36/99. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto y Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 18 de febrero del año 2000. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

Tesis de jurisprudencia 25/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticinco de febrero del año dos mil.

**Tesis****Registro digital:** 192487**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito    **Novena Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** XX.1o.94 L**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada**LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. LA LEGISLACIÓN SUPLETORIA EN EL PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS, LO ES LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.**

De acuerdo con el catálogo de normas que contempla la Ley del Servicio del Estado y los Municipios de Chiapas, en ninguno de sus supuestos otorga un título específico del procedimiento a seguir para el ofrecimiento, admisión, desahogo y perfeccionamiento de pruebas; en esa virtud, en su artículo noveno transitorio establece: "En lo no previsto y que no se oponga a esta ley es supletoria la Ley Federal de los Trabajadores del Estado."; sin embargo, la legislación que conforme al transcrito precepto es supletoria de la ley burocrática del Estado, tampoco consagra disposiciones específicas que prevean lo relativo. No obstante ello, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 11 preceptúa: "En lo no previsto por esta ley o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad.", hipótesis que válidamente da la pauta a considerar, que si para la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, en lo no previsto, es supletoria la ley reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional, en tanto no exista conflicto entre ambas legislaciones, y ésta a su vez, contempla la factibilidad de acudir a la supletoriedad de otras legislaciones, destacando en orden de aplicación preferente, la Ley Federal del Trabajo, ello conduce a establecer que no existe obstáculo legal para considerar que esta última, al ser supletoria de aquélla, también pueda serlo de la ley del servicio civil en comento, para el fin de resolver lo inherente a las formalidades que se deban observar en el procedimiento laboral burocrático en cuanto al desahogo de pruebas. Por lo anterior, quienes actualmente integran este órgano colegiado, con fundamento en lo previsto en el artículo 194 de la Ley de Amparo, estiman procedente interrumpir el criterio sustentado por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la jurisprudencia J/37, visible en la página 402, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, octubre de 1996, intitulada: "LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO ES SUPLETORIA DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).", ya que como se advierte de su contenido, para rechazar la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo sólo se atiende a lo dispuesto en el artículo noveno transitorio de la ley burocrática local, sin que se ocupe de mencionar por qué, ante la falta de disposiciones en una y otra legislación sobre aspectos básicos del proceso burocrático, como el relativo al ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, no pueda acudirse supletoriamente a la Ley Federal del Trabajo, no obstante lo que establece el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.**

Amparo directo 755/99. Secretaría de Educación del Estado. 1o. de diciembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hinostrosa Rojas. Secretaria: Miriam Marcela Punzo Bravo.

Nota: Esta tesis interrumpe el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia XX. J/37, de rubro: "LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO ES SUPLETORIA DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, página 402.

## Tesis

**Registro digital:** 193442

**Instancia:** Pleno

**Novena Época**

**Materia(s):** Constitucional,  
Laboral

**Tesis:** P. LV/99

**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.

**Tipo:** Aislada

**SINDICATOS BUROCRÁTICOS. EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO NO VIOLA LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, APARTADO B, FRACCIÓN X, AL ESTABLECER EL MÍNIMO DE VEINTE AGREMIADOS PARA SU CONSTITUCIÓN.**

El requisito de veinte o más trabajadores para que se constituya un sindicato, establecido en el artículo 71 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no viola la garantía social de libre sindicación de los trabajadores prevista en el artículo 123 constitucional, apartado B, fracción X, toda vez que dicho número de trabajadores que exige el artículo 71 de dicha ley, no es una limitación a la libertad sindical. El precepto constitucional no establece el mínimo de trabajadores para constituir un sindicato, de ahí que es patente que dejó esa función al legislador ordinario, como se aprecia de la lectura del segundo párrafo del artículo 123 que establece: "El Congreso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes, debe expedir leyes sobre el trabajo ...", por lo que se asignó al legislador ordinario la función de interpretar y reglamentar el derecho de que se trata, conservando su naturaleza colectiva y permanente, el cual tuvo la encomienda en beneficio de los trabajadores, de señalar un número determinado de éstos, de acuerdo con las normas fundamentales, con la naturaleza del derecho de sindicación y la realidad social. La disposición de que un sindicato burocrático se constituya con un número mínimo de veinte trabajadores, no coarta la libertad sindical, en cuanto el legislador ordinario en beneficio de los trabajadores estableció este requisito, sin que se afecte dicha libertad o la libertad individual de éstos, toda vez que lo que pretendió, fue que se creara un ente colectivo para defender a sus agremiados. Por tales motivos, el establecimiento de este requisito en la ley ordinaria, no vulnera el principio de libertad sindical, sino por el contrario, lo fortalece.

Amparo en revisión 3004/98. Sindicato de Trabajadores al Servicio del Instituto de Seguridad Social del Estado de Chiapas. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Carlos Mena Adame.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de julio en curso, aprobó, con el número LV/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve.

**Tesis****Registro digital:** 193612**Instancia:** Segunda Sala**Tesis:** 2a. C/99**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Laboral**Tipo:** Aislada

**TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIAPAS. SU CESE NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.**

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en las tesis de jurisprudencia 9/90 y 10/90, derivadas de la contradicción de tesis varios 6/88, sostuvo que el apartado B del artículo 123 constitucional equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, similar a la de un patrón, hecha excepción de los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, quienes se regirán por sus propias leyes. También se precisó que corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dirimir las controversias que se susciten entre el Estado y sus servidores, inclusive los de confianza (excluyendo al Poder Judicial de la Federación y sus servidores). Congruente con las disposiciones constitucionales, la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas da un carácter laboral al vínculo que se genera entre el Estado, los Municipios y sus trabajadores, lo que significa que cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral. Por tanto, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Estado de Chiapas deben ser ventilados ante el Tribunal del Servicio Civil de esa entidad, que es un órgano creado por la citada ley para ese fin. De ahí que debe establecerse que cuando un trabajador de confianza promueve un juicio de amparo contra la baja de que fue objeto por parte de la Dirección de Educación Básica del Estado de Chiapas, resulta improcedente, al surtir la causa prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, no sólo porque el acto por el que se determina la baja del empleado no es un acto de autoridad, sino porque el trabajador debe agotar previamente un medio ordinario de defensa, el juicio laboral.

Amparo en revisión 1561/98. Leoncio Solís Solís y otros. 12 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez.

Nota: Las tesis de jurisprudencia 9/90 y 10/90 a que se hace mención, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, páginas 91 y 92, con los rubros: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIDAD QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE." y "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE.", respectivamente.

**Tesis****Registro digital:** 193617**Instancia:** Segunda Sala**Novena Época****Materia(s):** Constitucional,  
Administrativa**Tesis:** 2a./J. 78/99**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Jurisprudencia

POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS. EL ARTÍCULO 5o. DEL REGLAMENTO DE DICHA CORPORACIÓN, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRECE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE VIOLA LA FRACCIÓN XIII APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.

El Poder Revisor de la Constitución estableció en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional que las relaciones entre los cuerpos de seguridad y el Estado se regirán por sus propias leyes, de lo que se desprende que sólo a través de un acto formal y materialmente legislativo se pueden establecer las modalidades del vínculo que une a los miembros de dichas corporaciones con el Estado, de tal suerte que sólo el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados se encuentran facultados para establecer las normas a las que se deben sujetar, por lo que el artículo 5o. del Reglamento de la Policía Federal de Caminos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de octubre de mil novecientos noventa y siete, viola la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, al haber sido expedido por el presidente de la República.

Amparo en revisión 1225/98. Francisco Enciso Gracida. 13 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.

Amparo en revisión 1170/98. Adán Raygadas Fernández. 13 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Amparo en revisión 1224/98. Ricardo Romualdo Sánchez Brena. 13 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel.

Amparo en revisión 1086/98. Arturo Mcbeath Shields. 18 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Morales Contreras.

Amparo en revisión 313/99. Manuel Santoyo Sánchez. 28 de mayo de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Careño Rivas.

Tesis de jurisprudencia 78/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de junio de mil novecientos noventa y nueve.



**Tesis****Registro digital:** 193775**Instancia:** Pleno**Novena Época****Materia(s):** Constitucional,  
Laboral**Tesis:** P. LIII/99**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

SINDICACIÓN ÚNICA. EL ARTÍCULO 42 DEL ESTATUTO JURÍDICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, DE LOS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO, VIOLA LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL.

El artículo 123 constitucional consagra la libertad sindical con un sentido pleno de universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse y reconociendo un derecho colectivo, una vez que el sindicato adquiere existencia y personalidad propias. Dicha libertad debe entenderse en sus tres aspectos fundamentales: 1. Un aspecto positivo que consiste en la facultad del trabajador para ingresar a un sindicato ya integrado o constituir uno nuevo; 2. Un aspecto negativo, que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse a sindicato alguno; y 3. La libertad de separación o renuncia de formar parte de la asociación. Ahora bien, el mandamiento de un solo sindicato de burócratas por dependencia, establecido en el artículo 42 del citado estatuto, viola la garantía social de libre sindicación de los trabajadores prevista en el artículo 123, apartado B, fracción X, de la Constitución General de la República, toda vez que al regular la sindicación única restringe la libertad de asociación de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

Amparo en revisión 1339/98. Francisco Pacheco García y coags. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el treinta y uno de mayo del año en curso, aprobó, con el número LIII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a primero de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, página 5, tesis P./J. 43/99, de rubro "SINDICACIÓN ÚNICA. LAS LEYES O ESTATUTOS QUE LA PREVÉN, VIOLAN LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL".

Nota: Por ejecutoria de fecha 9 de septiembre de 2005, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 15/2005-PL en que participó el presente criterio.





**Tesis****Registro digital:** 193868**Instancia:** Pleno**Novena Época****Materia(s):** Constitucional,  
Laboral**Tesis:** P./J. 43/99**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Jurisprudencia

**SINDICACIÓN ÚNICA. LAS LEYES O ESTATUTOS QUE LA PREVEN, VIOLAN LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL.**

El artículo 123 constitucional consagra la libertad sindical con un sentido pleno de universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse y reconociendo un derecho colectivo, una vez que el sindicato adquiere existencia y personalidad propias. Dicha libertad debe entenderse en sus tres aspectos fundamentales: 1. Un aspecto positivo que consiste en la facultad del trabajador para ingresar a un sindicato ya integrado o constituir uno nuevo; 2. Un aspecto negativo, que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse a sindicato alguno; y 3. La libertad de separación o renuncia de formar parte de la asociación. Ahora bien, el mandamiento de un solo sindicato de burócratas por dependencia gubernativa que establezcan las leyes o estatutos laborales, viola la garantía social de libre sindicación de los trabajadores prevista en el artículo 123, apartado B, fracción X, de la Constitución Federal de la República, toda vez que al regular la sindicación única restringe la libertad de asociación de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

Amparo en revisión 337/94. Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara. 21 de mayo de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alfredo E. Báez López.

Amparo en revisión 338/95. Sindicato de Solidaridad de los Trabajadores de los Poderes del Estado de Oaxaca y Organismos Descentralizados. 21 de mayo de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.

Amparo en revisión 408/98. Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria y coags. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto el Ministro Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Amparo en revisión 1339/98. Francisco Pacheco García y coags. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván.

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto

Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintisiete de mayo en curso, aprobó, con el número 43/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Nota: Por ejecutoria de fecha 9 de septiembre de 2005, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 15/2005-PL en que participó el presente criterio.

**Tesis****Registro digital:** 193869**Instancia:** Pleno**Novena Época****Materia(s):** Constitucional,  
Laboral**Tesis:** P. XLV/99**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

**SINDICACIÓN ÚNICA. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, VIOLA LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL.**

El artículo 123 constitucional consagra la libertad sindical con un sentido pleno de universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse y reconociendo un derecho colectivo, una vez que el sindicato adquiere existencia y personalidad propias. Dicha libertad sindical debe entenderse en sus tres aspectos fundamentales: 1. Un aspecto positivo que consiste en la facultad del trabajador para ingresar a un sindicato ya integrado o constituir uno nuevo; 2. Un aspecto negativo, que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse a sindicato alguno; y 3. La libertad de separación o renuncia de formar parte de la asociación. Ahora bien, el mandamiento de un solo sindicato por dependencia gubernativa, establecido en el artículo 68 de la citada ley, viola la garantía social de libre sindicación de los trabajadores prevista en el artículo 123, apartado B, fracción X, de la Constitución Federal de la República, toda vez que al regular la sindicación única restringe la libertad de asociación de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

Amparo en revisión 408/98. Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria y coags. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto el Ministro Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.

Amparo en revisión 3004/98. Sindicato de Trabajadores al Servicio del Instituto de Seguridad Social del Estado de Chiapas. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Carlos Mena Adame.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintisiete de mayo en curso, aprobó, con el número XLV/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, página 5, tesis P./J. 43/99, de rubro "SINDICACIÓN ÚNICA. LAS LEYES O ESTATUTOS QUE LA

PREVÉN, VIOLAN LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL."

Nota: Por ejecutoria de fecha 9 de septiembre de 2005, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 15/2005-PL en que participó el presente criterio.

**Tesis****Registro digital:** 193872**Instancia:** Segunda Sala**Novena Época****Materia(s):** Constitucional,  
Laboral**Tesis:** 2a. LXXVIII/99**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

TRABAJADORES DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE DICHA ENTIDAD, RESULTA INCONSTITUCIONAL.

En relación con el tema de la regulación de las relaciones laborales de los organismos públicos descentralizados de carácter federal y local con sus trabajadores, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 123, apartados A y B; 73, fracción X y 116, fracción VI, todos de la Carta Magna, ha establecido jurisprudencialmente que las relaciones laborales de los entes que integran la administración pública paraestatal, de carácter federal o local se rigen por el apartado A del artículo 123 constitucional, en tanto que el régimen aplicable a los trabajadores al servicio del Estado, es el que regula el apartado B del propio precepto constitucional, asimismo ha determinado que las legislaturas de los Estados se encuentran facultadas únicamente para legislar en materia de trabajo, en lo concerniente a las relaciones laborales existentes entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local y sus trabajadores, sin que dentro de este contexto puedan incluirse a los organismos públicos descentralizados. De ahí que si el artículo 1o. de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio del Estado de Baja California, incluye como sujeto de su regulación a los organismos públicos descentralizados, como la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en el Estado, tal disposición, resulta violatoria de los preceptos constitucionales anteriormente citados.

Amparo directo en revisión 294/99. Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Clementina Flores Suárez.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, página 52, tesis P./J. 1/96, de rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL."

**Tesis****Registro digital:** 194006**Instancia:** Segunda Sala**Tesis:** 2a./J. 39/99**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Laboral**Tipo:** Jurisprudencia

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE EL BANCO DE CRÉDITO RURAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO Y SUS TRABAJADORES. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

De los artículos 123, apartado B, fracción XIII bis, de la Constitución Federal, 1o. y 5o. de la ley reglamentaria de la fracción del precepto invocado, 1o. y 5o. de la Ley Orgánica del Sistema Banrural y 1o. y 3o. de la Ley de Instituciones de Crédito, se desprende que el Banco de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito es una institución bancaria de desarrollo, por lo que es una entidad de la administración pública federal que forma parte del sistema bancario mexicano. Por lo tanto, aunque no existe disposición que de manera expresa determine la autoridad competente para dirimir los conflictos laborales que se susciten entre las instituciones que forman parte del sistema bancario mexicano y sus trabajadores, de conformidad con el artículo 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que no representa oposición alguna a la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 Constitucional, corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje conocer de los conflictos que se susciten entre el banco y sus trabajadores.

Competencia 196/96. Suscitada entre la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, ambas en el Distrito Federal. 4 de octubre de 1996. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván.

Competencia 454/98. Suscitada entre la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal. 27 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Aristeo Martínez Cruz.

Competencia 506/98. Suscitada entre la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Competencia 453/98. Suscitada entre la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 24 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina Hernández Hernández.



Competencia 19/99. Suscitada entre la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. 16 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Andrés Pérez Lozano.

Tesis de jurisprudencia 39/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve.

**Tesis****Registro digital:** 194087**Instancia:** Segunda Sala**Tesis:** 2a. LIII/99**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Laboral**Tipo:** Aislada

COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, RESOLVER SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO HECHA POR UNA ASOCIACIÓN INTEGRADA POR MIEMBROS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO), A PARTIR DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE VEINTIDÓS DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.

El Sistema de Transporte Colectivo (Metro) fue creado con la naturaleza propia de un organismo público descentralizado federal, como resultado de que la legislación vigente en esa época relativa al régimen del Distrito Federal, competía tanto al Congreso de la Unión como al presidente de la República, en sus respectivos ámbitos de atribuciones; sin embargo, a raíz de las reformas constitucionales dadas a conocer en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, en las que fueron modificados diversos preceptos de la Carta Magna, principalmente el artículo 122, cambió la naturaleza jurídica de esa entidad federativa, con algunos rasgos diversos de las restantes. En concordancia con lo anterior, al crearse el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), se determinó que las relaciones de trabajo entre éste y sus trabajadores, se regirían por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución General de la República, disposición que debido al cambio sufrido en la estructura del Gobierno del Distrito Federal, en virtud de las modificaciones de la normatividad antes precisada, desde luego, dejó de tener aplicación, pues aun cuando en su momento el organismo de que se trata tuvo la naturaleza de una empresa paraestatal de carácter federal, conforme a lo dispuesto por la fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, del numeral 123, apartado A de la Constitución, en la actualidad ya no sucede eso. En consecuencia debe establecerse que la competencia para decidir sobre la solicitud de registro realizada por una asociación integrada por miembros del organismo de referencia, recae en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Este criterio es consecuente con lo establecido por el Tribunal Pleno en la tesis XXV/98, publicada en la página 122 del Tomo VII de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, bajo el rubro de "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER LOCAL. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL."

Competencia 333/98. Suscitada entre la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. 9 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez.



**Tesis****Registro digital:** 194906**Instancia:** Segunda Sala**Novena Época****Materia(s):** Laboral,  
Constitucional**Tesis:** 2a. CLX/98**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

COMPETENCIA LABORAL. EL VÍNCULO JURÍDICO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA CON SUS TRABAJADORES, INCLUIDOS LOS QUE CON ANTERIORIDAD A SU CREACIÓN PRESTABAN SUS SERVICIOS A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL O LOCAL, SE RIGE POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, Y DE LOS CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN CORRESPONDE CONOCER A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

Conforme a lo establecido en el acuerdo de Coordinación para la Descentralización de los Servicios de Salud en el Estado de Oaxaca, que celebraron el veinte de agosto de mil novecientos noventa y seis las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo, integrantes del Ejecutivo Federal, y el Estado de Oaxaca; y en el Decreto Número 27 emitido por el gobernador del propio Estado el veinte de septiembre del mismo año, al organismo público descentralizado "Servicios de Salud de Oaxaca" le fueron transferidas las funciones en materia de prestación de servicios de salud, incluyendo los recursos humanos necesarios para ello, disponiéndose que esta entidad es la titular de la nueva relación de trabajo y que a su secretario técnico corresponde nombrar y remover, previo acuerdo del presidente del consejo general, a los servidores públicos adscritos a ella. De ello se sigue que la relación equiparada de los trabajadores dedicados a la prestación de servicios de salud que laboraban tanto para la Secretaría de Salud, integrante del Ejecutivo Federal, como para la propia secretaría, de carácter local, que fueron transferidos al mencionado organismo descentralizado, sufrió una trascendental modificación, pues el régimen jurídico que rige tal vínculo dejó de ser el previsto en los artículos 123, apartado B, en el ámbito federal, y 116, fracción VI, en el ámbito local, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo ahora el diverso régimen previsto en el apartado A del primero de los preceptos antes citados, por lo que, para conocer de los conflictos que se susciten entre Servicios de Salud de Oaxaca y sus trabajadores, resulta competente la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en razón de que por la naturaleza de aquel organismo y de las funciones que realiza, no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción que surten la competencia federal. No obsta a lo anterior, el que la regulación ordinaria aplicable para regir el vínculo laboral en comento, se constituya por disposiciones de carácter burocrático, bien sea de carácter federal o local, pues de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 73, fracción X, última parte; 116, párrafo primero y fracción VI; y, 123, apartados A y B, de la propia Constitución, esta Suprema Corte de Justicia ha determinado que las relaciones laborales de tal naturaleza se rigen, necesariamente, por el citado apartado A y no por el régimen burocrático, que es de excepción.

Competencia 426/98. Suscitada entre la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. 18 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 481, tesis 2a. CXXXVIII/99, de rubro "COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LA DEMANDA INTERPUESTA POR UN TRABAJADOR EN CONTRA DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO."

**Tesis****Registro digital:** 194907**Instancia:** Segunda Sala**Novena Época****Materia(s):** Laboral,  
Constitucional**Tesis:** 2a. CLIX/98**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE CONOCER DE LOS CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN ENTRE PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA EN ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DE GUERRERO Y SUS TRABAJADORES, A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES PREVISTOS EN EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.

Conforme a la interpretación de lo dispuesto en los artículos 73, fracción X, última parte; 116, párrafo primero y fracción VI; y, 123, apartado A, fracción XXXI; inciso b), punto 1, y apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia ha concluido que si bien las Legislaturas Locales se encuentran facultadas para legislar en materia de trabajo, en lo relativo a las relaciones laborales existentes entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local y sus trabajadores, a esta potestad escapa la reglamentación del vínculo de tal naturaleza que se establece entre las entidades que integran la administración pública paraestatal local y sus trabajadores, dado que las citadas legislaturas deben ceñirse, en tal materia, a los principios que emanan del artículo 123 constitucional, entre los cuales destaca que la regulación laboral burocrática, única que pueden expedir, constituye un régimen de excepción, aplicable exclusivamente a las relaciones laborales de los mencionados poderes, bien sea federales o locales. De ahí que, aun cuando el Congreso del Estado de Guerrero haya establecido en el Decreto Número 77, del siete de agosto de mil novecientos noventa y siete, a través del cual creó el organismo público descentralizado denominado "Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre", que las relaciones laborales entre éste y sus trabajadores se deben regir por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, conforme a la cual el Tribunal de Conciliación y Arbitraje es el competente para conocer de los conflictos laborales que se presenten, debe concluirse que constitucionalmente, la relación laboral existente entre dicho organismo descentralizado y sus trabajadores se rige por lo dispuesto en el apartado A del artículo 123 constitucional y, por ende, para conocer de los conflictos laborales que entre ellos se susciten, serán competentes, según la naturaleza de las actividades que realice aquella entidad, las Juntas Federales o Locales de Conciliación y Arbitraje.

Competencia 289/98. Suscitada entre la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ambas en el Estado de Guerrero. 6 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

### Tesis

**Registro digital:** 195076

**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito

**Novena Época**

**Materia(s):** Laboral

**Tesis:** VII.1o.A.T.20 L

**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

**Tipo:** Aislada

POLICÍAS PREVENTIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. SON TRABAJADORES DE CONFIANZA Y NO ESTÁN PROTEGIDOS POR EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.

Aun cuando es verdad que el artículo 123, apartado B, fracción IX, constitucional, dispone que: "IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley.-En caso de separación injustificada tendrán derecho a optar por la reinstalación de su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley.", lo cierto en el caso es que el artículo 7o., fracción V, y su parte final, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, establece, entre otras cosas, que los miembros de las policías preventivas son trabajadores de confianza, y que gozarán de las medidas de protección al salario y los beneficios de seguridad social, y atento a ello, no puede decirse que éstos se encuentren en la hipótesis que consagra la referida norma de rango constitucional y, por tanto, cabe concluir que no gozan de la estabilidad en el empleo, sino únicamente de las medidas de protección al salario y los beneficios de la seguridad social.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 981/97. Ángel Martínez García. 5 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretaria: Nilvia Josefina Flota Ocampo.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 194/2016 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 6 de junio de 2016.



**Tesis****Registro digital:** 195854**Instancia:** Pleno**Novena Época****Materia(s):** Constitucional,  
Administrativa**Tesis:** P. XLIX/98**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUE ESTABLECEN UNA RELACIÓN LABORAL ENTRE LOS AGENTES QUE INTEGRAN AQUÉLLA Y DICHA DEPENDENCIA, TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL.

Conforme a la interpretación jurisprudencial que del citado precepto constitucional ha realizado este Alto Tribunal, el vínculo existente entre los miembros de los cuerpos de seguridad pública y el Estado no es de naturaleza laboral sino administrativa, ya que al disponer el Poder Revisor de la Constitución que los militares, los marinos, los miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior se regirán por sus propias leyes, excluyó a estos grupos del régimen laboral establecido en el apartado B del artículo 123, aunado a que, en el segundo párrafo de la fracción XIII de tal dispositivo otorgó expresamente, por estar excluidos de ello, a uno de estos grupos -miembros en activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada- las prestaciones establecidas en el inciso f) de la fracción XI del numeral en comento. Por ello, al prever los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que son trabajadores de confianza los agentes de la Policía Judicial Federal y que tal relación se regirá por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, estableciendo así un vínculo laboral entre dichos agentes y la citada procuraduría, se transgrede lo dispuesto en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional.

Amparo en revisión 1131/97. Sergio López Vázquez. 4 de noviembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Jesús Enrique Flores González.

Amparo en revisión 966/97. Manuel Torres Borunda. 4 de noviembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Jesús Enrique Flores González.

Amparo en revisión 206/97. Alberto Sotelo Chávez. 18 de noviembre de 1997. Once votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Sergio E. Alvarado Puente.

Amparo en revisión 330/97. Consuelo Alfaro Montemayor. 18 de noviembre de 1997. Once votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jorge H. Benítez Pimienta.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el seis de julio en curso, aprobó, con el número XLIX/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a seis de julio de mil novecientos noventa y ocho.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, tesis 2a./J. 14/98, página 352, de rubro: "POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS QUE SE LES CONSIDERA TRABAJADORES DE CONFIANZA, SON INCONSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA RELATIVA."

**Tesis****Registro digital:** 196229**Instancia:** Segunda Sala**Tesis:** 2a./J. 31/98**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Laboral**Tipo:** Jurisprudencia**TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ORIGEN HISTÓRICO DE LOS CATÁLOGOS DE PUESTOS EN LOS ORDENAMIENTOS BUROCRÁTICOS.**

El derecho burocrático se perfila como rama autónoma que evoluciona a partir del administrativo y tiende a asemejarse al laboral; al excluirse a los empleados públicos de la regulación de la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos treinta y uno, surgieron intentos de normatividad propia que cristalizaron hasta el año de mil novecientos treinta y ocho al promulgarse el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, que fue emulado por diversas legislaciones locales, le sucedió otro estatuto en el año de mil novecientos cuarenta y uno y hasta mil novecientos sesenta se adicionó el artículo 123 constitucional por un apartado B en que se reguló lo relativo a la relación de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal con sus servidores; en mil novecientos sesenta y tres se expidió su ley reglamentaria. Los ordenamientos estatutarios burocráticos encuentran origen en la exclusión de los empleados públicos de la reglamentación de la materia de trabajo entre particulares, como ordenamientos encargados de regular una relación de servicio que surgió del derecho administrativo y no laboral. Se trató entonces de regulaciones que se desarrollaron a partir de la recopilación de los antecedentes aislados que existían sobre el servicio público, como acuerdos presidenciales, circulares y algunos intentos de reglamentación del artículo 89 fracción II de la Constitución Federal, que establece las facultades del Ejecutivo para el libre nombramiento y remoción de los empleados públicos, cuyo nombramiento no esté determinado de otro modo en las leyes, por ello es que a diferencia del sistema de la Ley Federal del Trabajo que atiende a la naturaleza de la función desempeñada por el trabajador en cargos de inspección, vigilancia, administración y fiscalización y no a la denominación que se dé al puesto, desde el origen de la materia se ha atendido al sistema de catálogo para distinguir entre los trabajadores que cuentan con la protección del artículo 123 apartado B de la Constitución Federal y sus leyes reglamentarias a nivel federal y local y aquellos que siguen sujetos a la facultad de libre nombramiento y remoción mencionada.

Contradicción de tesis 13/97. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil y de Trabajo del Segundo Circuito. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.

Tesis de jurisprudencia 31/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de trece de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

### Tesis

**Registro digital:** 196538

**Instancia:** Pleno

**Novena Época**

**Materia(s):** Constitucional,  
Laboral

**Tesis:** P. XXVI/98

**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.

**Tipo:** Aislada

LEYES DEL TRABAJO. LAS LEGISLATURAS LOCALES SÓLO PUEDEN EXPEDIR LEYES REGLAMENTARIAS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.

Del análisis conjunto y sistemático de las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el Congreso de la Unión cuenta con la facultad exclusiva para legislar en la materia de trabajo, en general, con apoyo en los artículos 73, fracción X, última parte y 123, apartado A y, adicionalmente, respecto de las relaciones de trabajo conocidas como burocráticas, en lo relativo a los Poderes Federales, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, de acuerdo con este último artículo, en su apartado B; en tanto que el artículo 116, fracción VI, al autorizar a los Poderes Legislativos de cada entidad federativa a expedir leyes que regirán las relaciones de trabajo entre los Estados (Poderes Locales) y sus trabajadores, es evidente que sólo pueden expedir leyes reglamentarias del apartado B del indicado artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de comprender a otros sujetos, las mismas resultarían inconstitucionales.

Amparo en revisión 1110/97. Francisco Soriano Celis. 13 de enero de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintitrés de marzo en curso, aprobó, con el número XXVI/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

**Tesis****Registro digital:** 196539**Instancia:** Pleno**Novena Época****Materia(s):** Constitucional,  
Laboral**Tesis:** P. XXV/98**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

**ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER LOCAL. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.**

Dispone el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se rigen por las leyes que expidan las Legislaturas de los mismos, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias, que son la Ley Federal del Trabajo respecto del apartado A, que comprende a la materia de trabajo en general, y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que desarrolla los principios comprendidos en el apartado B, fuente del derecho burocrático; por esta razón, es este último apartado el aplicable a las relaciones de trabajo habidas entre los Poderes de los Estados federados y sus trabajadores, según se concluye si se atiende al párrafo introductorio del artículo 116 aludido, que divide al poder público de los Estados en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y lógica la consecuente necesidad de que en la esfera local sea pormenorizado legalmente. En conclusión, y atento que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia firme que los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo, debe establecerse que las relaciones laborales de dichos organismos de carácter local con sus trabajadores escapan a las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales.

Amparo en revisión 1110/97. Francisco Soriano Celis. 13 de enero de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintitrés de marzo en curso, aprobó, con el número XXV/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

**Tesis****Registro digital:** 196609**Instancia:** Segunda Sala**Novena Época****Materia(s):** Administrativa,  
Constitucional**Tesis:** 2a./J. 14/98**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Jurisprudencia

**POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS QUE SE LES CONSIDERA TRABAJADORES DE CONFIANZA, SON INCONSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA RELATIVA.**

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado, reiteradamente, ("POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", Novena Época, Pleno, tesis P./J. 24/95; "POLICÍAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA BAJA DEL SERVICIO DE LOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", Octava Época, Pleno, Tomo I, Primera Parte-1, página 43; "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE.", Octava Época, Pleno, tesis P./J. 9/90; "POLICÍAS. EL AMPARO INDIRECTO ES PROCEDENTE CONTRA LA ORDEN QUE DECRETA SU BAJA.", Novena Época, Segunda Sala, 2a./J. 7/96; "POLICÍAS. TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA ORDEN DE BAJA.", Novena Época, Segunda Sala, 2a./J. 8/96) en el sentido de que los miembros de los cuerpos de seguridad pública no están sujetos al régimen laboral que establece el apartado B del artículo 123 constitucional, ni quedan incluidos en la relación laboral que existe entre los trabajadores de confianza y el Estado, equiparándolo con un patrón, ya que el vínculo existente entre los miembros de seguridad pública y el Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa, en tanto que si en la Constitución se hubiese querido dar un trato igual a los grupos mencionados en la misma, constituidos por los militares, los marinos, los miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, no se hubiera establecido, en dicha fracción, que debían regirse por sus propias leyes, ya que hubiera bastado con lo enunciado en el apartado B, al señalar las reglas generales para normar las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores. En estas condiciones, lo establecido en los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, son contrarios a lo dispuesto en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, pues la razón de la inclusión en un precepto expreso, de que los cuatro grupos citados deben regirse por sus propias leyes, se ve nulificada al asemejarlos a los trabajadores al servicio del Estado. Es decir, la disposición constitucional, al diferenciar a estos grupos en las reglas que regulan las relaciones del Estado con sus trabajadores, señalando que deberán regirse por sus propias leyes, las excluye de la aplicación de las normas que se establecen en el citado apartado. Por último, la exclusión de los miembros de los cuerpos de seguridad pública de las relaciones que regula el apartado B del artículo 123 constitucional, se hace patente si se considera que en el segundo párrafo de la fracción XIII se establece que el Estado deberá proporcionar a los miembros en activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones establecidas en el inciso f) de la fracción XI, lo que implica un privilegio constitucional en favor de algunos de los sujetos que contempla la fracción XIII, establecido en forma expresa en atención a

que se encuentran excluidos de dichas prestaciones. Esto es, si la intención de la Potestad Revisora hubiera sido la de considerar a los grupos señalados en la fracción XIII del apartado B, como trabajadores de confianza, con los derechos de protección al salario y a la seguridad social, no hubiera sido necesario disponer, expresamente, que el Estado se encuentra obligado a otorgar a una parte de ese grupo lo que ya está establecido en la fracción XIV, de lo que se evidencia la exclusión de dichos grupos de ser considerados como trabajadores.

Amparo en revisión 3034/96. Jerónimo Eduardo Osorno Lara y otro. 30 de mayo de 1997. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar.

Amparo en revisión 1171/97. Andrés Ortega Caballero. 27 de agosto de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Amparo en revisión 1251/97. Jorge Bernardo Tercero Vega. 31 de octubre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González García.

Amparo en revisión 2232/97. Jimmy Guadarrama Mc Naught. 14 de noviembre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar.

Amparo en revisión 2439/97. Alejandro Uriel Martínez Calzada. 20 de febrero de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano Gallegos.

Tesis de jurisprudencia 14/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de marzo de mil novecientos noventa y ocho.



**Tesis****Registro digital:** 196746**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito    **Novena Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** XXI.1o.74 L**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada**TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE GUERRERO. ACTAS ADMINISTRATIVAS LEVANTADAS POR FALTAS COMETIDAS EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES.**

De un análisis integral de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Número 248, se desprende que no establece un procedimiento específico para levantar actas administrativas para hacer constar faltas en que pudieran incurrir los trabajadores de referencia; por tanto, cobra aplicación lo dispuesto por el artículo 9o. de dicho ordenamiento que, entre otras cosas, señala que a falta de disposición expresa de la ley deben tomarse en cuenta disposiciones que regulen casos semejantes y supletoriamente se aplicarán, en su orden: la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional, la Ley Federal del Trabajo, los principios generales de derecho, las costumbres y el uso. En tales condiciones, para levantar un acta administrativa a un servidor público del Estado de Guerrero, en primer término debe tomarse en cuenta lo dispuesto por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución General de la República, por establecerlo así expresamente el numeral antes invocado de la ley local; por tanto, si el ordenamiento de aplicación supletoria, en los artículos 46 y 46 bis, dispone, entre otras cosas, que al levantar actas administrativas por faltas de los trabajadores debe darse intervención al trabajador, al representante del sindicato, nombrar testigos de cargo y de descargo y entregar una copia de dicha acta al trabajador, y del examen de las constancias de autos se advierte que el acta administrativa que sirvió de base o fundamento para el posterior cese del trabajador no reúne los requisitos enumerados, es obvio que el procedimiento seguido para separar a éste de su empleo sin responsabilidad para el patrón resulta viciado y, por ende, violatorio de garantías, máxime que en el caso concreto la parte patronal demandada no se ajustó al orden de aplicación supletoria que exige el artículo 9o. de la ley local invocada, pues para levantar el acta administrativa exhibida invocó como fundamento el artículo 47, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo; bajo esas condiciones, resulta obligado concluir que al no sujetarse el organismo público demandado, para el levantamiento del acta administrativa correspondiente, al orden de aplicación supletoria expresamente determinado en la ley que rige las relaciones laborales entre el Gobierno del Estado de Guerrero y sus trabajadores y al no reunir ese documento los requisitos exigidos por el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución General de la República, violó garantías del quejoso.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.**

Amparo directo 639/97. Adolfo Alcaráz Bello. 17 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Mateo Manuel Baños Baños.



**Tesis****Registro digital:** 196866**Instancia:** Pleno**Novena Época****Materia(s):** Constitucional,  
Laboral**Tesis:** P. VII/98**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. LA LEY RESPECTIVA NO CONTRAVIENE EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO ESTABLEZCA LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD.

Del análisis de las distintas fracciones que contiene el apartado B del artículo 123 constitucional, se advierte que en ninguna se establece como derecho de los trabajadores al servicio del Estado la prima de antigüedad, por lo que los trabajadores sujetos a ese régimen, constitucionalmente, no tienen derecho a esa prestación, sin que pueda llegarse a una conclusión diversa por la circunstancia de que en la fracción XIV del aludido dispositivo se establezca que las personas que desempeñen cargos de confianza disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de seguridad social, dado que la prima de antigüedad es una prestación que se rige por el principio de continuidad en el trabajo, siendo su naturaleza independiente de cualquier otra prestación contractual, de manera tal que no encuadra dentro de la protección al salario ni de la seguridad social. Por tanto, si la ley local referida omite consignar entre sus normas la prima de antigüedad, no puede considerarse violatoria del aludido precepto constitucional, en tanto no prevé dicha prestación entre los derechos de los trabajadores al servicio del Estado.

Amparo directo en revisión 2836/96. Elías Torres del Río. 13 de enero de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el proyecto Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Irma Rodríguez Franco.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el nueve de febrero en curso, aprobó, con el número VII/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a nueve de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

**Tesis****Registro digital:** 197549**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito    **Novena Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** I.6o.T. J/17**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Jurisprudencia

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. TIEMPO EXTRAORDINARIO. NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NI LA JURISPRUDENCIA QUE DE ELLA SE DERIVA.

No es aplicable en beneficio de los trabajadores al servicio del Estado la presunción legal establecida en el artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo ni la jurisprudencia número 126, que bajo el título: "HORAS EXTRAORDINARIAS, CARGA DE LA PRUEBA.", se halla publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, porque tomando en consideración que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado fue promulgada por decreto publicado el 28 de diciembre de 1963, la que en su artículo 11 dispuso que en lo no previsto expresamente por la misma o disposiciones especiales, se aplicaría en su orden la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad, y que el artículo de la comentada ley no ha sido reformado, es de concluirse que en él se expresó la voluntad del legislador de suplir lo no previsto en su ley con las normas de la entonces en vigor Ley Federal del Trabajo, de 18 de agosto de 1931, las que por efecto de la supletoriedad así ordenada quedaron incorporadas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de 1963; pero esa indicación de supletoriedad no significa propósito legislativo de ligar permanentemente la Ley Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional a modificaciones posteriores que surgieran del desarrollo evolutivo de las normas reglamentarias del apartado A del mismo artículo constitucional, porque ello implicaría desconocer las diferencias específicas entre las fuentes reales de dos ordenamientos jurídicos; uno, para regular las prestaciones de los servicios subordinados a patrones sujetos jurídicos privados para beneficio de sus particulares intereses; otro, para regular las prestaciones de servicios subordinados al patrón, ente público, para beneficio de los intereses sociales generales encomendados a éste. Por lo que la supletoriedad de que se trata sólo puede significar que el legislador, al establecerla, refirió un conjunto de normas ya existentes, como instrumento para completar y explicar la significación del que estaba emitiendo en ese momento, pero no que el conjunto normativo que estructuraba debiese quedar sujeto permanentemente a las modificaciones que, en su propia evolución, sufran las normas de la misma jerarquía legal, cuya existencia y desarrollo posteriores tienen motivos y fines propios, diversos e independientes de la normatividad específica que formula en un momento dado.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 11326/88. Apolinar Suriano López. 16 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Oscar Castañeda Batres.

Amparo directo 7296/92. Rafael López Sánchez. 13 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Estela Jasso Figueroa.

Amparo directo 4556/93. Federico Díaz Márquez. 18 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: J. Refugio Gallegos Baeza. Secretario: Víctor Ruiz Contreras.

Amparo directo 8496/93. Martha Muñiz Martínez. 16 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Óscar Castañeda Batres.

Amparo directo 12376/96. César Ibarra Sánchez. 13 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Patiño Pérez. Secretario: José Luis Martínez Luis.

Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 173/2004-SS resuelta por la Segunda Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 22/2005, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005, página 254, con el rubro: "HORAS EXTRAS. CUANDO LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO RECLAMAN SU PAGO Y EL TITULAR CONTROVIERTE LA DURACIÓN DE LA JORNADA, A ÉSTE LE CORRESPONDE LA CARGA DE ACREDITAR QUE ÚNICAMENTE LABORABAN LA LEGAL."

**Tesis****Registro digital:** 197954**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito    **Novena Época****Materia(s):** Administrativa**Tesis:** II.2o.P.A.48 A**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. TRABAJADORES DE CONFIANZA. NO SE ENCUENTRAN EXCLUIDOS DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA CONSAGRADA EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE SEAN OÍDOS EN DEFENSA DE SUS INTERESES, CUANDO SE CONTROVIERTE SU ESTABILIDAD LABORAL.

El hecho de que el quejoso sea trabajador de confianza, como miembro de la Policía Judicial Federal, y que por tanto no goce de estabilidad en el empleo, resultando discrecional la potestad del Estado para dar por terminada la relación laboral, y ello se rija por las disposiciones contenidas en el apartado B del artículo 123 constitucional, no implica que quienes pertenezcan a ese cuerpo policiaco se encuentren excluidos del régimen jurídico constitucional establecido en favor de los gobernados y que se les coloque al margen de los efectos protectores de las garantías individuales, como lo es la de audiencia, pues el apartado B del artículo 123 constitucional no establece que dichos empleados no gozarán de esa garantía; por el contrario, en la fracción IX se establece que los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la ley, aun cuando se establezca, en la diversa fracción XIII, que los cuerpos de seguridad pública se regirán por sus propias leyes, porque en éstas, y específicamente en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, tampoco se establece que los agentes de la Policía Judicial Federal puedan ser separados del ejercicio de sus funciones sin necesidad de dar cumplimiento a la garantía de audiencia; por el contrario, en el Reglamento de la Carrera de la Policía Judicial Federal se establece en el artículo 44, que el oficial mayor o, en su caso, el director general de Recursos Humanos, después de haberse desarrollado el procedimiento correspondiente, podrán tramitar el cese o la destitución de los miembros de la corporación, decretado por el procurador general de la República, por alguna de las causas que se contemplan en los artículos 46, fracciones I y V, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y por inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el funcionamiento de la Policía Judicial Federal y, de manera fundamental, que en todos los casos a los servidores adscritos a la Policía Judicial Federal se les otorgará la garantía de audiencia respectiva, ya que la propia legislación de la materia aplicable establece el derecho de los agentes de la Policía Judicial Federal de ser oídos en defensa de sus intereses cuando se controvierte su estabilidad laboral, por lo que al violarse la garantía de audiencia que en su favor establece el artículo 14 constitucional, por no haberse sustanciado, previamente a la emisión del acto reclamado, un procedimiento a través del cual hubiere tenido oportunidad de ser oído en defensa, y toda vez que el respeto a los dispositivos constitucionales se impone sobre cualquier legislación ordinaria, el otorgamiento de la protección constitucional al solicitante del amparo es correcto, porque con anterioridad a ser suspendido, cesado, o a que se deje sin efectos el nombramiento que le otorga la calidad de servidor público, debe hacerse saber las razones que motivan tal determinación, dándole oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, a efecto de desvirtuar o controvertir los motivos de la autoridad.

### SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisión 48/97. Guillermo Robles Liceaga. 20 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretario: Eduardo N. Santoyo Martínez.

Amparo en revisión 47/97. Guillermo Robles Liceaga. 20 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretario: Eduardo N. Santoyo Martínez.

Amparo en revisión 31/97. José Arturo Baltazar Sánchez. 27 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretaria: Sara Olimpia Reyes García.

Amparo en revisión 10/97. José Arturo Baltazar Sánchez. 27 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretaria: Sara Olimpia Reyes García.



**Tesis****Registro digital:** 198723**Instancia:** Pleno**Novena Época****Materia(s):** Laboral,  
Constitucional**Tesis:** P. LXXIII/97**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ESTÁN LIMITADOS SUS DERECHOS LABORALES EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XIV DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.

El artículo 123, apartado B, establece cuáles son los derechos de los dos tipos de trabajadores: a) de base y b) de confianza; configura, además, limitaciones a los derechos de los trabajadores de confianza, pues los derechos que otorgan las primeras fracciones del citado apartado, básicamente serán aplicables a los trabajadores de base; es decir, regulan, en esencia, los derechos de este tipo de trabajadores y no los derechos de los de confianza, ya que claramente la fracción XIV de este mismo apartado los limita en cuanto a su aplicación íntegra, puesto que pueden disfrutar, los trabajadores de confianza, sólo de las medidas de protección al salario y de seguridad social a que se refieren las fracciones correspondientes de este apartado B, pero no de los demás derechos otorgados a los trabajadores de base, como es la estabilidad o inamovilidad en el empleo, puesto que este derecho está expresamente consignado en la fracción IX de este apartado.

Amparo directo en revisión 1033/94. Jorge González Ortega. 27 de febrero de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el seis de mayo en curso, aprobó, con el número LXXIII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a seis de mayo de mil novecientos noventa y siete.

**Tesis****Registro digital:** 198907**Instancia:** Pleno**Tesis:** P. LIX/97**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Laboral**Tipo:** Aislada

**SOBRESEIMIENTO Y CADUCIDAD DE LA INSTANCIA POR INACTIVIDAD PROCESAL. NO PROCEDE DECRETARLOS RESPECTO DE UNA INSTANCIA PROMOVIDA POR UN TRABAJADOR DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO.**

Conforme a lo dispuesto en los tres primeros párrafos de la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, en los amparos directos y en los indirectos, así como en los amparos en revisión, cuando no se haya efectuado ningún acto procesal durante el término de trescientos días, incluyendo los inhábiles, ni el quejoso o el recurrente hayan promovido en ese mismo lapso, se producirá, respectivamente, el sobreseimiento por inactividad procesal o la caducidad de la instancia, salvo el caso en que el trabajador sea alguna de las partes citadas, por lo que, considerando que los trabajadores de confianza al servicio del Estado, en tanto no se trate de aquellos excluidos por el segundo párrafo de la fracción XII y por la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, por una parte, gozan de las medidas protectoras del salario y de los beneficios de seguridad, aun cuando no se les otorguen constitucionalmente los mismos derechos que a los trabajadores de base y, por otra, al tenor de lo establecido en el primer párrafo de la fracción XII del invocado apartado del citado dispositivo constitucional, sus inconformidades, respecto de los derechos que detentan, serán dirimidas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, debido a que su cese no es un acto de autoridad, toda vez que el Estado no actúa en él investido de imperio, es válido concluir que la relación que guardan con el Estado resulta equiparable o similar a la laboral y, por tanto, gozan del beneficio que excepcionalmente establece el referido tercer párrafo de la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, el cual se refiere, en términos genéricos, a la parte trabajadora, sin hacer distinción alguna entre aquellos sujetos a la Ley Federal del Trabajo o a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ni entre los de base o de confianza cuya relación de trabajo se regula por este último ordenamiento.

Amparo directo en revisión 1033/94. Jorge González Ortega. 27 de febrero de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: presidente José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el ocho de abril en curso, aprobó, con el número LIX/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a ocho de abril de mil novecientos noventa y siete.

**Tesis****Registro digital:** 199506**Instancia:** Pleno**Tesis:** P. I/97**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Laboral**Tipo:** Aislada

SINDICACION UNICA. EL ARTICULO 76 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, VIOLA LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL, APARTADO "B", FRACCION X.

El artículo 123 constitucional consagra la libertad sindical con un sentido pleno de universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse y reconociendo un derecho colectivo, una vez que el sindicato adquiere una existencia y una realidad propias. Dicha libertad sindical debe entenderse en sus tres aspectos fundamentales: 1. Un aspecto positivo que consiste en la facultad del trabajador para ingresar a un sindicato ya integrado o constituir uno nuevo; 2. Un aspecto negativo, que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse a un sindicato alguno; y 3. La libertad de separación o renuncia de formar parte de la asociación. Ahora bien, el establecimiento de un solo sindicato por dependencia, regulado en el artículo 76 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, viola la garantía social de libre sindicación de los trabajadores prevista en el artículo 123 constitucional, apartado "B", fracción X, toda vez que al regular la sindicación única restringe la libertad de asociación de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

Amparo en revisión 337/94. Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara. 21 de mayo de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alfredo E. Báez López.

Amparo en revisión 338/95. Sindicato de Solidaridad de los Trabajadores de los Poderes del Estado de Oaxaca y Organismos Descentralizados. 21 de mayo de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de enero en curso, aprobó, con el número I/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a trece de enero de mil novecientos noventa y siete.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, página 5, tesis P./J. 43/99, de rubro "SINDICACIÓN ÚNICA. LAS LEYES O ESTATUTOS QUE LA PREVÉN, VIOLAN LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL".

Nota: Por ejecutoria de fecha 9 de septiembre de 2005, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 15/2005-PL en que participó el presente criterio.



**Tesis****Registro digital:** 199777**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito**Novena Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** I.7o.T.48 L**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. OMISION DE PRECISAR EN LA DEMANDA EL SALARIO.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal del Trabajo es el primer conjunto de normas que se aplica supletoriamente a la primera Ley citada. El artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, establece que en los laudos se determinará el salario que sirva de base a la condena, cuando se trate de prestaciones económicas, en consecuencia ningún laudo puede omitir el señalamiento del salario; por ende, si el trabajador omitió precisar el salario base para la condena, la Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje procede correctamente si toma en cuenta el salario mínimo general, aunque el trabajador pertenezca al régimen del apartado "B" del artículo 123 constitucional.

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 4847/96. Mauricio Cuauhtémoc González Hernández. 27 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Yolanda Múgica García. Secretario: Eduardo Sánchez Mercado.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, página 249, tesis por contradicción 2a./J. 53/97 de rubros: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA OMISIÓN DEL MONTO DEL SALARIO, COMO BASE PARA CUANTIFICAR LA CONDENA, SE SUBSANA CON LA REMISIÓN AL CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS DEL GOBIERNO FEDERAL." y "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA CONSULTA DEL CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS DEL GOBIERNO FEDERAL Y DEL RESPECTIVO TABULADOR REGIONAL, NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE ESOS DOCUMENTOS LOS EXHIBA EL TRABAJADOR, POR LO QUE SI NO OBRAN EN AUTOS LA AUTORIDAD DEBE ALLEGARSE ESA PRUEBA."

**Tesis****Registro digital:** 199839**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito**Novena Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** I.7o.T. J/11**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Jurisprudencia

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ARTICULO 47 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO TIENE APLICACION SUPLETORIA EN RELACION CON LA LEY FEDERAL DE LOS.

La aplicación supletoria de una ley es válida, cuando se encuentra contenida en la ley originaria la prestación, el derecho o la institución de que se trate, y dicha ley no la regula con amplitud necesaria, es decir, presenta "lagunas" que pueden subsanarse aplicando las disposiciones que al efecto establece la ley supletoria, pero no es lógico ni jurídico acudir a la aplicación supletoria de una ley, para introducir a la ley natural instituciones ajenas a la misma, porque ello equivaldría a integrar a esta ley, prestaciones, derechos o instituciones extrañas, invadiendo de esta manera, las atribuciones que la Constitución Federal reserva exclusivamente a los órganos legislativos; bajo tales circunstancias, si la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, no establece la obligación patronal de dar al trabajador, aviso escrito de la fecha y causa o causas de rescisión y tampoco señala que la falta de tal aviso será suficiente para considerar injustificado el despido, debe decirse que en la ley originaria aplicable al asunto, no se contienen los derechos a favor del trabajador, que derivan de la obligación patronal apuntada y en esa virtud, es evidente que no es aplicable supletoriamente la disposición que a ese respecto se refiere el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo.

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 6537/95. José Raúl Aguilera Oseguera. 3 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Borrego Martínez. Secretario: Casimiro Barrón Torres.

Amparo directo 6757/95. Griselda Ortiz Ochoa. 17 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María Yolanda Múgica García. Secretario: Antonio Hernández Meza.

Amparo directo 9697/95. Juan Medina Valadez. 3 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Sofía Verónica Avalos Díaz.

Amparo directo 9497/96. Federico Antonio Cuevas Trujillo. 10 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Edna Lorena Hernández Granados.

Amparo directo 9747/96. José Cristóbal González. 24 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Yolanda Múgica García. Secretario: Arturo Amaro Cázares.





**Tesis****Registro digital:** 200199**Instancia:** Pleno**Novena Época****Materia(s):** Laboral,  
Constitucional**Tesis:** P./J. 1/96**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Jurisprudencia

**ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARACTER FEDERAL. SU INCLUSION EN EL ARTICULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.**

El apartado B del artículo 123 constitucional establece las bases jurídicas que deben regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir la legislación respectiva que, como es lógico, no debe contradecir aquellos fundamentos porque incurriría en inconstitucionalidad, como sucede con el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que sujeta al régimen laboral burocrático no sólo a los servidores de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, sino también a los trabajadores de organismos descentralizados que aunque integran la administración pública federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, cuyo ejercicio corresponde, conforme a lo establecido en los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al presidente de la República, según atribuciones que desempeña directamente o por conducto de las dependencias de la administración pública centralizada, como son las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos. Por tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores, no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional.

Amparo en revisión 1115/93. Ismael Contreras Martínez. 30 de mayo de 1995. Mayoría de ocho votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, en ausencia de él hizo suyo el proyecto el Ministro Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Salvador Castro Zavaleta.

Amparo en revisión 1893/94. María de la Luz Bachiller Sandoval. 30 de mayo de 1995. Mayoría de ocho votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Martín Angel Rubio Padilla.

Amparo en revisión 1226/93. Francisco Coronel Velázquez. 5 de junio de 1995. Mayoría de diez votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Martín Angel Rubio Padilla.

Amparo en revisión 1911/94. José Luis Rodríguez González. 11 de julio de 1995. Mayoría de diez votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Martín Angel Rubio Padilla.

Amparo en revisión 1575/93. Armando Montes Mejía. 14 de agosto de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro, en ausencia de él hizo suyo el proyecto el Ministro Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Martín Angel Rubio Padilla.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el quince de enero en curso, por unanimidad de once votos de los Ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 1/1996 la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a quince de enero de mil novecientos noventa y seis.

Nota:

Véase la ejecutoria publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, pág. 42, correspondiente al mes de agosto de 1995.

Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 34/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 6 de febrero de 2015.

Esta tesis fue sustituida en términos de la que con el rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. CON BASE EN LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL ÓRGANO DE CREACIÓN, SU RÉGIMEN LABORAL PUEDE REGIRSE POR EL APARTADO A O POR EL B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN; POR LO QUE NO RESULTA INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO." y número de identificación P./J. 10/2021 (11a.), aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de enero de 2022 a las 10:29 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 9, Tomo I, enero de 2022, página 5, registro digital: 2024102.

**Tesis****Registro digital:** 200331**Instancia:** Pleno**Novena Época****Materia(s):** Laboral,  
Constitucional**Tesis:** P./J. 16/95**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Jurisprudencia

TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. SUS RELACIONES LABORALES CON DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO SE RIGEN DENTRO DE LA JURISDICCION FEDERAL, POR EL APARTADO "A" DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL.

El organismo descentralizado Servicio Postal Mexicano, al no formar parte del Poder Ejecutivo Federal, no se rige por el Apartado "B" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino por el Apartado "A" de dicho precepto, específicamente dentro de la jurisdicción federal, conforme a lo establecido en su fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, que reserva a la competencia exclusiva de las Juntas Federales, los asuntos relativos a empresas que sean administradas en forma descentralizada por el gobierno federal, características que corresponden al referido organismo descentralizado, aunque no sea el lucro su objetivo o finalidad, ya que de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, por empresa se entiende, para efectos laborales, la organización de una actividad económica dirigida a la producción o al intercambio de bienes o de servicios, aunque no persiga fines lucrativos.

Amparo en revisión 83/94. Marco Antonio Becerril Torres. 16 de marzo de 1995. Mayoría de diez votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Irma Rodríguez Franco.

Amparo en revisión 1115/93. Ismael Contreras Martínez. 30 de mayo de 1995. Mayoría de ocho votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, en ausencia de él hizo suyo el proyecto el Ministro Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Salvador Castro Zavaleta.

Amparo en revisión 1226/93. Francisco Coronel Velázquez. 5 de junio de 1995. Mayoría de diez votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Martín Angel Rubio Padilla.

Amparo en revisión 1911/94. José Luis Rodríguez González. 11 de julio de 1995. Mayoría de diez votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Martín Angel Rubio Padilla.

Amparo en revisión 1575/93. Armando Montes Mejía. 14 de agosto de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro, en ausencia de él hizo suyo el proyecto el Ministro Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Martín Angel Rubio Padilla.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el quince de agosto en curso, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 16/1995 (9a.) la tesis de

jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a quince de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

Nota: Véase el Voto Particular emitido por el Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, pág. 29, correspondiente al mes de julio de 1995.

**Tesis****Registro digital:** 200372**Instancia:** Pleno**Novena Época****Materia(s):** Laboral,  
Constitucional**Tesis:** P. XXVIII/95**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

**RESCISION DE LA RELACION LABORAL POR CAUSA IMPUTABLE AL ESTADO PATRON. LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO NO VIOLA LA GARANTIA DE IGUALDAD, POR NO CONCEDER ACCION A LOS TRABAJADORES BUROCRATICOS.**

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no viola la garantía constitucional de igualdad al no conceder a los trabajadores burocráticos una acción similar a la que tienen los trabajadores ordinarios para rescindir la relación laboral por causa imputable al patrón, pues de lo dispuesto por el Apartado "B" del artículo 123 de la Ley Fundamental, se desprende que fue intención del Constituyente establecer una diferencia clara entre el trabajo ordinario y el trabajo burocrático, considerando la naturaleza de la relación que existe en uno y otro, así como la posición de los sujetos que en ella intervienen, pues mientras en el primero interviene la libre voluntad de las partes, cuyo contenido puede ser determinado por éstos dentro de los límites protectores que fijan las normas de orden público tendientes a salvaguardar el equilibrio entre los factores de la producción, en el segundo la relación nace como consecuencia de un acto de nombramiento, además de que el desempeño de la función no se encuentra sujeto a la libre voluntad del titular de la dependencia burocrática y del servidor, sino predeterminado por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; estas notas distintivas, de las que derivan otras no menos importantes, permiten considerar que en el aspecto examinado no puede darse al trabajador burocrático el mismo tratamiento que la Constitución da al trabajador ordinario, pues tratándose del principio de igualdad, es necesario atender no sólo a las semejanzas existentes entre dos categorías de sujetos, sino también a las diferencias que justifiquen un trato desigual, y la rescisión, por causa imputable al patrón, que en el trabajo ordinario encuentra su fundamento en la aplicación de la cláusula común a los contratos bilaterales en general (en especial los civiles que son su antecedente remoto), es extraña a la relación del Estado con sus servidores; además, la circunstancia de que la ley en estudio, en su artículo 46 otorgue al Estado la facultad de dar por concluidos los efectos del nombramiento sin su responsabilidad, no significa que deba asistir al trabajador la misma facultad en caso de incumplimiento de aquél a sus deberes como patrón, pues aunado a que el Constituyente no estableció en el Apartado "B" del artículo 123 constitucional una norma protectora igual a la instituida en el Apartado "A" para los trabajadores ordinarios, al Estado toca velar porque sus servidores acaten fielmente los deberes que garantizan la eficacia y continuidad de la función pública, por lo que es preciso dotarlo de un poder jurídico para excluir a quienes quebranten las reglas y pongan en peligro la consecución de los cometidos estatales.

Amparo directo en revisión 1733/93. Gloria María Ramírez Amor. 16 de marzo de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el quince de junio en curso, por unanimidad de

once votos de los señores Ministros Presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número XXVIII/95 (9a.) la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a quince de junio de mil novecientos noventa y cinco.

**Tesis****Registro digital:** 200530**Instancia:** Segunda Sala**Tesis:** 2a. LXXXVII/96**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Laboral**Tipo:** Aislada

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS POR LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO. CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

Si bien es cierto que el artículo 14 del Decreto por el cual se creó el Instituto Mexicano de la Radio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y tres, establece que las relaciones de trabajo entre dicho Instituto y sus trabajadores se regirán por el apartado "B" del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria; sin embargo, como dicho Instituto es un organismo público descentralizado que forma parte integrante de la administración pública federal paraestatal, las relaciones con sus trabajadores deben regularse por lo dispuesto en los artículos 123, apartado "A", fracción XXXI, inciso b), subinciso 1 de la Constitución Federal y su correlativo 527, fracción II, inciso 1, de la Ley Federal del Trabajo, y no por el apartado "B" del precepto constitucional invocado, toda vez que este último contempla las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y el Distrito Federal con sus trabajadores, sin que el referido Instituto forme parte de los mismos. Por lo tanto, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es la autoridad competente para conocer de los conflictos laborales promovidos en contra del Instituto Mexicano de la Radio.

Competencia 269/96. Suscitada entre la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ambas del Distrito Federal. 6 de septiembre de 1996. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Roberto Lara Hernández.



**Tesis****Registro digital:** 201587**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito**Novena Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** I.5o.T. J/8**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Jurisprudencia**TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO, PRUEBA DEL CARACTER DE.**

Si bien es cierto que los empleados de confianza al servicio del Estado, no están protegidos por el apartado "B" del artículo 123 constitucional, en cuanto a la estabilidad en el empleo, no menos cierto es que tal carácter debe ser demostrado por el titular demandado en forma fehaciente, cuando el puesto que acepta tener el activo no se encuentra incluido expresamente en el diverso 5o. de la ley burocrática, siendo además necesario que el patrón a fin de probar su excepción, consigne en qué norma se formalizó la creación de la plaza del trabajador, para estimar que las funciones que desempeñaba pertenecían a la categoría de confianza, esto último conforme a lo que prevé el numeral 7o. del mismo ordenamiento legal.

**QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo directo 10225/88. Fortunato Valenzuela López. 9 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela. Secretaria: María Isabel Haruno Takata Gutiérrez.

Amparo directo 6425/89. Colegio de Bachilleres. 19 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela. Secretario: José Francisco Cilia López.

Amparo directo 2355/92. Alberto López del Olmo. 26 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela. Secretario: Erubiel Arenas González.

Amparo directo 835/96. Eduardo García Valtierra. 27 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Barredo Pereira. Secretario: Martín Borrego Dorantes.

Amparo directo 5475/96. Servicio Postal Mexicano. 20 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela. Secretario: José Francisco Cilia López.

**Tesis****Registro digital:** 202176**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Administrativa**Tesis:** I.3o.A.21 A**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

POLICIA BANCARIO E INDUSTRIAL. DESTITUCION DEL CARGO. PROCEDENCIA DEL AMPARO, AL SER SU RELACION DE SERVICIO CON EL ESTADO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.

La acción constitucional ejercitada en contra de la resolución que decretó la destitución del cargo que desempeñaba el quejoso en la Policía Bancaria e Industrial, es procedente y congruente con el principio de definitividad del juicio de amparo, sin que exista necesidad de agotar el recurso previsto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ello atento a dos consideraciones, a saber: 1) Que al prestar el agraviado sus servicios a la corporación mencionada (misma que está incluida dentro de la Policía Preventiva del Distrito Federal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal), desempeña una actividad auxiliar de vigilancia y previsión del orden público, encomendada originalmente por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a la secretaría del ramo; luego entonces, su actividad es de interés público y social, teniendo por ende la calidad de servidor público. En consecuencia, su relación con el Estado no es de carácter laboral (como la ha equiparado el derecho positivo mexicano en beneficio de los empleados del Estado, asimilando éste a un patrón sui generis), sino administrativa, al quedar excluido de la aplicación de la fracción XIII del artículo 123 constitucional, apartado "B", de la Constitución Política. De ahí que las determinaciones que el ente estatal tome en torno a este nexo (particular-Estado) no constituyen actos de particulares, sino de autoridad; 2) Que no obstante ser el agraviado trabajador de confianza según el artículo 5o., fracción II, inciso I), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (como lo ha precisado el tribunal Pleno en su jurisprudencia 24/1995), la distinción entre trabajadores de base y de confianza contenida en el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tiene como única finalidad el que dicho cuerpo normativo se aplique a los primeros, quedando excluidos expresamente de su aplicación, en los términos del artículo 8o. de la Ley en cita, tanto los trabajadores de confianza como los cuatro grupos precisados en la fracción XIII, apartado "B", del artículo 123 constitucional (militares, marinos, cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior). En esta tesitura, es la propia Constitución la que excluye al quejoso de una relación equiparable a la laboral y por ende, determina la procedencia del juicio de garantías en contra de la orden de destitución.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 3863/95. Blanca Estela Rodríguez Garza. 1o. de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Vicente Román Estrada Vega.

Amparo en revisión 3873/95. Fortino Pérez Martínez. 20 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ma. de la Luz Pineda Pineda.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo III-Marzo, Segunda Sala, tesis 8/96, página 555.

### Tesis

**Registro digital:** 202276

**Instancia:** Tribunales Colegiados  
de Circuito

**Novena Época**

**Materia(s):** Laboral

**Tesis:** I.4o.T.33 L

**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.

**Tipo:** Aislada

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, LEY DE LOS. NO CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE RESCINDIR LA RELACION LABORAL POR PARTE DEL TRABAJADOR.

Si bien es cierto que el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, prevé la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo -entre otros ordenamientos legales- no menos resulta ser que tal supletoriedad opera con el fin de complementar aspectos o situaciones insuficientemente reglamentados en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, lo que no puede llegar al extremo de crear figuras jurídicas no contenidas en esta Ley; ahora bien, atendiendo a que la rescisión de la relación laboral por causas imputables al Estado patrón, no está prevista en el apartado "B" del artículo 123 constitucional, sino exclusivamente en el apartado "A" del propio precepto constitucional, es evidente que no puede darse la aplicación supletoria de esta disposición para introducir esa institución que el legislador no previó en el apartado primeramente mencionado, así como en su ley reglamentaria; por lo anterior, los trabajadores al servicio del Estado no tienen sustento jurídico alguno para rescindir la relación laboral por causas imputables al patrón.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 147/95. Laura Torrentera Blanco. 27 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio García Guillén. Secretario: José Francisco Albarrán Mendoza.

**Tesis****Registro digital:** 202618**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito    **Novena Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** II.1o.C.T.1 L**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

COMPETENCIA. TRIBUNAL DE ARBITRAJE; REGIMEN JURIDICO DE LOS POLICIAS MIEMBROS DEL CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA, COMERCIAL Y URBANA DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO).

En la relación existente entre el Estado con sus trabajadores no se ejerce imperio, sino que éste actúa como patrón en la realización de actos de carácter laboral, por lo tanto, tales actos no pueden combatirse mediante ningún otro medio de defensa que no sea el juicio laboral que se siga ante el Tribunal de Arbitraje, en términos del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados, además de que el artículo 95 de dicho ordenamiento en su fracción I, establece la competencia del Tribunal de Arbitraje para resolver en definitiva los conflictos individuales que se susciten entre los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados y sus servidores. Por otra parte, cabe señalar que el artículo 123 constitucional contiene dos apartados: El A), que regula las relaciones entre el capital y el trabajo, esto es, las relaciones en las empresas particulares; y el B), que regula única y exclusivamente las relaciones que se dan entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, respecto a sus trabajadores. En tal virtud, el precepto constitucional aludido no regula las relaciones que se dan entre los Estados de la Federación y sus trabajadores; por lo cual, en los términos del artículo 124 constitucional, la facultad de regular las relaciones entre los Estados y sus trabajadores se entiende reservada a los Estados. Ahora bien, el régimen jurídico de los policías varía según derive del artículo 123, apartado B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o del Estatuto del Estado de México, porque en el primer caso el legislador excluyó expresamente a los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como al personal del servicio exterior para que se rigieran por sus propias leyes según lo expresa la fracción XIII, inciso B), del precepto citado. En consecuencia, el criterio jurisprudencial que tiende a dirimir un tema competencial respecto de un amparo interpuesto por un policía del Distrito Federal, es inaplicable al Estado de México.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 197/95. Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria, Comercial y Urbana del Valle Cuautitlán Texcoco. 8 de marzo de 1995. Mayoría de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Disidente: Salvador Bravo Gómez. Secretario: Nicolás Castillo Martínez.

Amparo directo 175/95. Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria, Comercial y Urbana del Valle Cuautitlán Texcoco. 28 de febrero de 1995. Mayoría de votos. Ponente: Enrique Pérez

González. Disidente: Salvador Bravo Gómez. Secretario: Nicolás Castillo Martínez.

Amparo directo 151/95. Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria, Comercial y Urbana del Valle Cuautitlán Texcoco. 23 de febrero de 1995. Mayoría de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Disidente: Salvador Bravo Gómez. Secretario: Alejandro García Gómez.

Amparo directo 20/95. Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria, Comercial y Urbana del Valle Cuautitlán Texcoco. 22 de febrero de 1995. Mayoría de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Disidente: Salvador Bravo Gómez. Secretario: Octavio Bolaños Valadez.

Amparo directo 108/95. Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria, Comercial y Urbana del Valle Cuautitlán Texcoco. 14 de febrero de 1995. Mayoría de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Disidente: Salvador Bravo Gómez. Secretaria: Vianey Gutiérrez Velázquez.

Nota: La presente tesis no integra jurisprudencia a pesar de contar con cinco precedentes, por no cumplir con el requisito de votación por unanimidad que para tal efecto exige la Ley de Amparo.

### Tesis

**Registro digital:** 203890

**Instancia:** Tribunales Colegiados  
de Circuito

**Novena Época**

**Materia(s):** Laboral

**Tesis:** I.5o.T.33 L

**Fuente:** Semanario Judicial de la  
Federación y su Gaceta.

**Tipo:** Aislada

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, LA FALTA INJUSTIFICADA A LAS LABORES SE TRADUCE EN TRANSGRESION A SUS OBLIGACIONES Y MOTIVA EL CESE.

El abandono de las faenas por el empleado al servicio del Estado, sin causa justificada, motu proprio, prevista en el artículo 46, fracción I, de la Ley Reglamentaria del Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional, se refiere al factor perjuicio que causa a sus deberes con la inasistencia.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 9535/95. Instituto Nacional de Pediatría. 13 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela. Secretario: José Francisco Cilia López.



**Tesis****Registro digital:** 203981**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito    **Novena Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** II.2o.C.T.4 L**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA, COMERCIAL Y URBANA DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO. RELACION DE CARACTER ADMINISTRATIVO Y NO LABORAL LA DE LOS INTEGRANTES DE.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno, ha considerado que si bien en principio, debe equipararse a una relación laboral, la existente entre el Estado y sus empleados, esa equiparación no comprende a todos los servidores públicos, pues la fracción XIII, del artículo 123 constitucional, excluye a cuatro grupos, a saber: los militares, marinos y miembros de los grupos de seguridad pública, así como el personal del servicio exterior, los cuales se regirán por sus propias leyes; en cuyo caso, al erigir el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, como un órgano competente para dirimir todas las controversias que se susciten entre el Estado y sus servidores, sujetos a la relación sui generis que antes se puso de manifiesto, no comprendería a la categoría de trabajadores excluida. Resulta aplicable al respecto la tesis visible a fojas 43, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, la cual se transcribe en seguida: "POLICIAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA BAJA DEL SERVICIO DE LOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado fue, en principio, de naturaleza administrativa, pero el derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón 'sui generis'. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos, a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía preventiva del Distrito Federal constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII, apartado 'B' del artículo 123 constitucional y por el artículo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con la administración pública sigue siendo de naturaleza administrativa y se rige por las normas, también administrativas y reglamentos que les corresponden y que, por lo tanto, el acto de baja del servicio no es acto de particular sino de una autoridad, razones por las cuales el juez de Distrito que debe conocer del juicio de amparo que se promueve contra dichos actos es el juez de Distrito en materia administrativa, y no el de materia laboral." Por otra parte, el artículo 116 constitucional, fracción V, establece: "Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias." En ese orden de ideas, si conforme al último de los preceptos constitucionales mencionados, las Legislaturas de los Estados deben expedir las leyes que regulen las relaciones entre las entidades federativas y sus trabajadores, con base en lo expuesto por el artículo 123, apartado "B", de la Constitución Federal, debe concluirse que entre los cuerpos policiacos estatales y las entidades federativas tampoco existe una relación

laboral, sino de carácter administrativo. Conviene destacar, que la obligación de las entidades federativas, respecto de regular las relaciones de sus trabajadores, sujetándose al contenido del artículo 123 constitucional, apartado "B", ha sido reconocida por la Cuarta Sala de nuestro más alto tribunal de la República en criterio reiterado, según se desprende de la jurisprudencia 4a./J.22/93, visible a fojas 20 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 65, correspondiente a mayo de 1993, la cual se transcribe en seguida: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. NO ESTAN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR TANTO, CARECEN DE ACCION PARA DEMANDAR LA REINSTALACION O LA INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE. De conformidad con los artículos 115, fracción VIII, último párrafo, y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las relaciones de trabajo entre los Estados y Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados, de conformidad con el artículo 123 de la misma Constitución; por su parte, del mencionado artículo 123, apartado 'B', fracciones IX (a contrario sensu) y XIV, se infiere que los trabajadores de confianza están excluidos del derecho a la estabilidad en el empleo; por tal razón no pueden válidamente demandar prestaciones derivadas de ese derecho con motivo del cese, como son la indemnización o la reinstalación en el empleo, porque derivan de un derecho que la Constitución y la ley no les confiere." No importa en contrario, que de los artículos 1o. y 2o., del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, pudiera desprenderse que los servicios prestados por los miembros de los cuerpos policiacos coincidan con los de naturaleza laboral y que el artículo 5o. del invocado cuerpo legal, incluyera a los cuerpos de seguridad como "empleados de confianza", pues ello es contrario al texto expreso de la fracción XIII, apartado "B", del artículo 123 constitucional, que excluye a los miembros de la seguridad pública del régimen ordinario aplicable a la generalidad de los empleados públicos y los remite a sus propias leyes, por lo que el citado Estatuto, carece de fundamento constitucional para clasificar a los agentes de policía. Además, es de advertirse que la intención del constituyente, al determinar que las Legislaturas de los Estados deberán expedir leyes para regular las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, con apoyo en el artículo 123 constitucional, fue con objeto de unificar en todo el territorio nacional el tratamiento que debería otorgarse a las personas que presten sus servicios para los organismos públicos, en los términos y bajo las condiciones que específicamente se establecen en el apartado correspondiente del precepto constitucional de mérito, pero no en forma indiscriminada, ya que de lo contrario se llegaría al absurdo de permitir, que en algunos Estados de la Federación se reglamentara como de naturaleza laboral, y en otros de carácter administrativo, rompiéndose con ello el principio de fundamentalidad constitucional. En consecuencia, de manera incongruente el Tribunal de Arbitraje condenó a la quejosa al pago de las prestaciones reclamadas, pues si conforme a lo apuntado, entre los contendientes existía una relación de naturaleza administrativa, carecía de competencia constitucional para conocer de los conflictos relativos y en tal virtud, debió dejar a salvo los derechos del actor, para hacerlos valer ante la autoridad competente y en la vía legal correspondiente.

### SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 751/95. Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria, Comercial y Urbana del Valle Cuautitlán Texcoco. 9 de agosto de 1995. Mayoría de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Disidente: Raúl Solís Solís. Secretario: Juan Banderas Trigos.

**Tesis****Registro digital:** 204089**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito    **Novena Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** XXI.2o.5 L**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

POLICIA. TRABAJADORES DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO CON CATEGORIA DE. POR SER TRABAJADORES DE CONFIANZA. NO ESTAN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.

La Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248, que rige las relaciones de trabajo de los servidores de base y supernumerarios de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, del Poder Legislativo y del Poder Judicial de esa entidad federativa, no determina quiénes serán considerados trabajadores de confianza, únicamente establece, en su artículo 4o., que los trabajadores al servicio del Estado se clasifican en: de base y supernumerarios; por tal razón, debe atenderse a lo dispuesto en la legislación supletoria que autoriza su artículo 9o., específicamente, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en cuyo artículo 5o., fracción II, se determina que en el Poder Ejecutivo, son trabajadores de confianza, entre otros, los miembros de las policías preventivas. Ahora bien, conforme al artículo 7o., del citado ordenamiento laboral del Estado, los empleados de confianza tendrán derecho a disfrutar de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. La norma en comento es análoga a la disposición contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Federal, cuyo tenor es: "La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social." Una sana interpretación del dispositivo legal en cuestión, permite arribar a la conclusión que, los trabajadores de confianza al servicio del Gobierno del Estado de Guerrero, entre los que se encuentran aquellos con la categoría de policía preventivo en la Subdirección de Protección y Vialidad, debe reputarse que están excluidos de la estabilidad en el empleo en razón de la actividad que desempeñan; por consiguiente, cuando ante el tribunal al que compete conocer de sus conflictos laborales, alega haber sido objeto de un despido injustificado y reclama el pago de indemnización constitucional y salarios caídos, tal pretensión es improcedente.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 327/95. Margarito Limón Barrios. 6 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Javier Cardoso Chávez.

**Tesis****Registro digital:** 204334**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito    **Novena Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** XVII.2o.9 L**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (S.A.R.) LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS RECLAMACIONES DEL. EN LAS CONTROVERSIAS ENTRE LOS TRABAJADORES Y PATRONES.

La Junta de Conciliación y Arbitraje indebidamente se declaró incompetente para conocer de la reclamación consistente en el pago de la cantidad que resulte por concepto de diferencia del Sistema de Ahorro para el Retiro (S.A.R.), pues en relación a las controversias entre trabajadores y patrones relacionadas con el pago de las cuotas patronales instituidas para el Sistema de Ahorro para el Retiro, en el Diario Oficial de la Federación de 22 de julio de 1994 se publicó el Decreto para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, por el cual en el artículo primero se establece la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la que en el artículo 1o., Capítulo I, previene que dicha Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer la coordinación entre las dependencias, entidades, instituciones de crédito y entidades financieras que participan en los sistemas de ahorro para el retiro. Asimismo, la propia Ley, en el Capítulo V, titulado: De la Protección de los Intereses de los Trabajadores Cuentahabientes, en el artículo 25, cuarto párrafo, previene: "En las controversias relacionadas con los sistemas de ahorro para el retiro, el tribunal competente deberá solicitar y tomar en cuenta el dictamen técnico de la comisión. Los trabajadores o sus beneficiarios podrán exhibir en su caso, el dictamen técnico de la etapa conciliatoria a que se refiere el artículo 26. Las controversias entre los trabajadores y patrones se resolverán según corresponda por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. En el caso de los trabajadores sujetos al apartado B del artículo 123 constitucional las citadas controversias se resolverán por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje." De lo que se concluye que la Junta de Conciliación y Arbitraje responsable sí es competente para conocer de las reclamaciones relacionadas con el pago de las cuotas patronales instituidas para el Sistema de Ahorro para el Retiro.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 167/95. Luz Elba Estrada Rodríguez. 29 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Gregorio Vázquez González. Secretaria: Natalia López López.

**Tesis****Registro digital:** 204393**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito    **Novena Época****Materia(s):** Administrativa**Tesis:** I.4o.A.19 A**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DEL CESE DECRETADO EN SU CONTRA RESULTA IMPROCEDENTE PORQUE NO ENCUADRA DENTRO DE LA EXCEPCION PREVISTA EN LA FRACCION XIII DEL APARTADO "B" DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL.

Si bien los agentes del Ministerio Público Federal en términos del artículo 21 constitucional son los encargados de la persecución de los delitos, tal característica no encuadra dentro de la excepción de acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a que se refiere la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución, ya que este precepto únicamente contempla dentro de la excepción, entre otros, a los cuerpos de seguridad pública, los que al regirse por sus propias leyes, no tienen la obligación de acudir al tribunal aludido a dirimir sus conflictos; por tanto, el cese decretado en contra de los funcionarios mencionados debe ser impugnado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, cuya determinación es necesaria para que se convierta en un acto de autoridad susceptible de impugnar a través del juicio de amparo; de lo contrario éste resulta improcedente.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 684/95. Roberto Carrillo García. 26 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Ramón E. García Rodríguez.



